



## ODS + 10

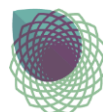
### *Chile frente a la Agenda 2030: prioridades para la cuenta regresiva*

Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable (SDSN Chile)

2025



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE



Red Campus  
Sustentable  
Educación para la Sustentabilidad



Observa Biobío  
Observatorio de políticas regionales

Instituto Políticas Públicas

IPPUCN  
Universidad Católica del Norte



RIMISP  
Centro Latinoamericano  
para el Desarrollo Rural



Centro UC  
CLAPES UC  
Centro Latinoamericano de  
Políticas Económicas y Sociales



FUNDACION  
SUPERACION  
DE LA POBREZA  
SERVICIO PAÍS



CIESGER  
Universidad del Desarrollo



S U F U F A



PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE  
VALPARAÍSO



Pacto Global  
Red Chile



**SDSN Chile es una agrupación de instituciones chilenas bajo el marco de SDSN Global.**

La SDSN (Sustainable Development Solutions Network) moviliza a la comunidad mundial del conocimiento para encontrar soluciones basadas en la ciencia para el desarrollo sostenible. La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN) opera bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas, movilizando la mayor red de conocimientos del mundo para impulsar acciones en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Creada en 2012 por el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el economista de Columbia University, Jeffrey Sachs, la SDSN promueve enfoques integrados para el desarrollo sustentable a través de la educación, la investigación, el análisis de políticas y la cooperación global.

La SDSN trabaja en la intersección de la ciencia, las políticas y la práctica del desarrollo, maximizando los logros de los ODS a nivel mundial, regional, nacional y local. En colaboración con agencias de la ONU, instituciones financieras multilaterales, gobiernos, el ámbito académico, la sociedad civil y el sector privado, la SDSN desarrolla estrategias basadas en la ciencia para la implementación de los ODS, promueve el monitoreo independiente y la rendición de cuentas del progreso del desarrollo sustentable, identifica brechas y prioridades persistentes mediante mecanismos de retroalimentación para adaptar las estrategias de los ODS a largo plazo, y facilita el aprendizaje entre pares, el intercambio de conocimientos y el intercambio de mejores prácticas.

**La red chilena fue fundada en 2022 y es coordinada por el Instituto para el Desarrollo Sustentable, Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con las siguientes instituciones colaboradoras:**

Red Campus Sustentable	Universidad Autónoma de Chile
UCN (Instituto de Políticas Públicas)	UFRO
PUCV	UDD (CiSGER)
Pacto Global	SOFOFA
RIMISP	Fundación Superación de la Pobreza
UC (IDS; CLAPES)	Observa BíoBio
UNAB (Hub de Negocios Sostenibles)	-

## Contenido

<b>1. Propósito .....</b>	<b>4</b>
<b>¿Cómo vamos? Radiografía de Chile según los informes ODS .....</b>	<b>5</b>
Jonathan R. Barton y Rodrigo Álvarez Instituto para el Desarrollo Sustentable UC/Instituto de Políticas Públicas UCN.....	5
<b>2. Tendencias y Propuestas: 2025-2030 .....</b>	<b>12</b>
<b>ODS 1: Fin de la pobreza .....</b>	<b>13</b>
<b>i. Los desafíos de una vida con autonomía y participación.....</b>	<b>13</b>
Catalina Littin y Miguel Becerra Fundación Superación de la Pobreza.....	13
<b>ODS 2: Hambre cero.....</b>	<b>19</b>
<b>ii. La inseguridad alimentaria en Chile a través del tiempo .....</b>	<b>19</b>
Rodrigo Yáñez Rojas RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural .....	19
<b>ODS 4: Educación de calidad .....</b>	<b>24</b>
<b>iii. Análisis de los avances en Educación de Calidad en Chile .....</b>	<b>24</b>
Patricia Opazo Red de Campus Sustentable .....	24
<b>ODS 5: Equidad de género .....</b>	<b>29</b>
<b>iv. Por una Administración Pública y un sector privado equitativo: avances y desafíos.....</b>	<b>29</b>
Vanesa Muñoz, Observa Bio-Bio. Luciana Mitjavila, Hub de Negocios Sostenibles de la Universidad Andrés Bello.....	29
<b>ODS 10: Reducción de desigualdades .....</b>	<b>34</b>
<b>v. Una mirada del ODS 10 en el contexto chileno .....</b>	<b>34</b>
Juan Páez Instituto de Políticas Públicas, Universidad Católica del Norte .....	34
<b>vi. Acelerar avances con sentido de urgencia en Acción Climática en Chile .....</b>	<b>40</b>
Margarita Ducci – Pacto Global Chile.....	40
<b>4. Equidad: priorización y ejecución .....</b>	<b>49</b>
Jonathan R. Barton y Rodrigo Álvarez Instituto para el Desarrollo Sustentable UC/Instituto de Políticas Públicas UCN.....	49
<b>Referencias.....</b>	<b>52</b>



## **1. Propósito**

Este informe tiene el objetivo de servir como llamado a la acción en temáticas prioritarias para el desarrollo sustentable en Chile, en el marco de la Agenda 2030. A 5 años de la fecha 2030, hay una urgencia para realizar las acciones para alcanzar las metas planteadas hace 10 años.

Este informe genera una radiografía de avances y retrocesos, la importancia de enfocar los esfuerzos en prioridades y la difusión de tales priorizaciones para la movilización de organizaciones académicas, públicas, privadas y la sociedad civil.

Buscamos incorporar la perspectiva de los miembros de SDSN Chile a través de este informe según sus intereses y especialidades. El índice a continuación estructura el informe para una lectura sencilla y resumida para el público general, incorporando sus tópicos de investigación junto con los datos que respaldan el contexto actual de la Agenda 2030. Por más información sobre datos nacionales e internacionales, ver: <https://dashboards.sdgindex.org/>



## ¿Cómo vamos? Radiografía de Chile según los informes ODS

Jonathan R. Barton y Rodrigo Álvarez

Instituto para el Desarrollo Sustentable UC/Instituto de Políticas Públicas UCN

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) se plantearon en 2015 para combatir la pobreza, las desigualdades socioeconómicas y el cambio climático, entre múltiples otros temas, en el contexto actual de crisis planetaria. A diez años de su publicación, el avance de los ODS ha sido solo de un 16% según SDSN (Sachs, Lafortune & Fuller, 2024). Según Naciones Unidas, solo un 35 % de las metas de los ODS están bien encaminadas o registran avances moderados, casi la mitad avanzan demasiado lentamente y un 18 % retroceden, lo que representa grandes amenazas frente al escenario actual de múltiples crisis (UN, 2025).

Es clave reconocer que los aportes “globales” son el conjunto de las iniciativas nacionales y subnacionales alrededor del mundo. En cada contexto nacional y local, los desafíos y las prioridades son distintas. Por eso, la importancia de reconocer cuáles son las principales limitantes a nivel regional y local, los roles de los diversos actores, las oportunidades, y los desafíos más urgentes, en estos cinco años restantes de la Agenda.

Agenda 2030 fue la estrategia más reciente a nivel internacional para avanzar con el desarrollo sustentable, identificado como un camino deseable al inicio de los años 70. Fue la publicación de la Comisión sobre Medio Ambiente y Desarrollo, *Nuestro Futuro Común* (o el Informe Brundtland) en 1987 que definió ese camino como:

*“El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.”*

Más adelante, en la primera Ley de Bases Generales de Medio Ambiente en Chile en 1994, esta definición fue incorporada como al camino para el desarrollo en Chile (Art. 2(g)), agregando una mención del cambio climático en una modificación en 2022:

*“El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, considerando el cambio climático de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras.”*

Diversas agendas han guiado el debate del desarrollo sustentable a nivel global, nacional y local: la Declaración de Estocolmo (1972), la Estrategia Mundial para la Conservación (1980), el Informe Brundtland (1987), la Agenda 21 (1992), los Objetivos del Milenio (2000) y, actualmente, la Agenda 2030 (2015). A pesar de los avances de estas agendas, no se ha logrado una armonización del desarrollo económico con las necesidades sociales y ecológicas (Rockström et al., 2009), lo que intensifica su relevancia en el contexto actual.

En Chile, persiste el desafío de desvincular las presiones medioambientales del crecimiento económico (OCDE, 2024), lo que ha generado grandes desigualdades, riesgos y conflictos socioambientales. Para eso, la Agenda 2030 plantea una serie de objetivos, metas e indicadores que permiten ir encausando temáticas sociales, económicas, políticas y territoriales con el objetivo común del desarrollo sustentable. El avance en torno a los indicadores de la Agenda 2030 son medidos por los Informes Nacionales Voluntarios (INV), y en una escala menor, los Informes Locales Voluntarios (ILV), buscando contrarrestar la debilidad en la generación de datos a nivel local (Barton y Álvarez, 2024). Chile ha presentado tres versiones del Informe Nacional Voluntario (2017; 2019; 2023) en tres gobiernos distintos (Bachelet II, Piñera II y Boric), lo que muestra un compromiso transversal a través del Consejo Nacional de Implementación de la Agenda 2030. Este Consejo en la actualidad se encuentra ejecutando la Estrategia para la Implementación de la Agenda 2030 enfocada en políticas públicas, gobernanza, seguimiento y difusión, y otras iniciativas como los Consejos de Articulación Regional (CAR) enfocados en la participación a nivel territorial, proyectos locales y regionales para los ODS.

Junto al seguimiento, se encuentran las experiencias de priorización, donde destaca el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF). En su sesión de 2024 se priorizó el ODS 1 Fin de la Pobreza, ODS 2 Hambre Cero, ODS 13 Acción Climática, ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y el ODS 17 de Alianzas, mientras la reunión de julio 2025 destacó ODS 3 Salud, ODS 5 Género, ODS 8 Crecimiento Económico y Empleo, ODS 14 Recursos Marinos, y también ODS 17. Asimismo, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2023-2026 generó 4 prioridades estratégicas: (1) Igualdad sustantiva en el acceso y goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); (2) Institucionalidad democrática y seguridad fortalecidas para un nuevo contrato social inclusivo; (3) Modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente para enfrentar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación; (4) Igualdad de género. A la vez, en América Latina los Informes Regionales preparados por CEPAL para distintos ODS priorizan el ODS 7 de energías asequibles (Contreras & Salgado, 2021) y el ODS 4 de Educación (2022).

En la línea de reconocer los avances, y sobre todo los principales temas pendientes, aunque sin hacer un desglose exhaustivo del desempeño del país en los ODS, este informe propone una

priorización de los ODS con el fin de fortalecer el conocimiento y apoyar la toma de decisiones en Chile.

Como SDSN Chile, reconocemos que los objetivos establecidos por esta Agenda son ambiciosos y muy difíciles de alcanzar en 2030. Sin embargo, consideramos relevante generar un análisis que nos permita guiar las acciones más urgentes para avanzar hacia el cumplimiento de los ODS. Para ello, este informe prioriza 7 ODS en los cuales se debe trabajar a nivel multisectorial para poder generar cambios tangibles que permitan mover la aguja y avanzar en los próximos años de la Agenda 2030. Para fundamentar esta priorización, a continuación, se comparan algunos datos respecto al avance de los ODS en Chile según el último Informe Nacional Voluntario (2023), el SDSN *Sustainable Development Report* (2024 y 2025) y el Informe de Desempeño Ambiental de la OCDE (2024).

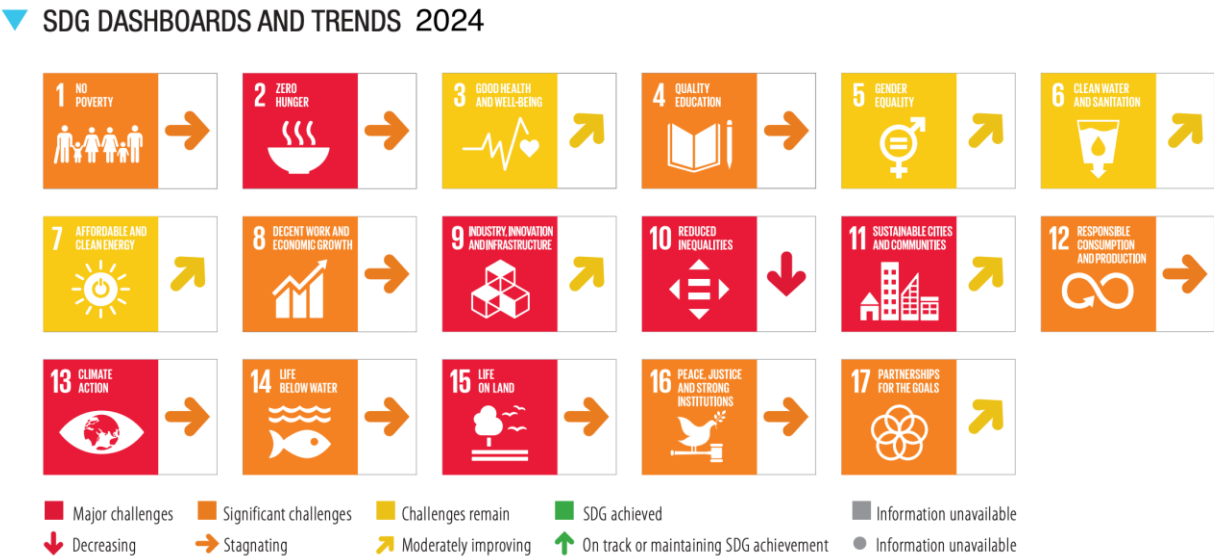
En su última versión, el INV (2023) refleja problemáticas centrales del país en los distintos ODS y presenta pasos clave en la consecución de la Agenda 2030 como la “territorialización de los ODS de manera coherente con el proceso de descentralización que vive el país y la promoción de la participación ciudadana”. Dentro de sus conclusiones menciona la necesidad de avanzar sustantivamente en la disminución de las desigualdades, pobreza, desnutrición, violencias y discriminación, y mejorar la salud, protección social, pensiones y cuidados.

Respecto a las desigualdades, ha habido avances en redes SDSN a nivel nacional y regional para poder medirlas. Por ejemplo, la red SDSN de Estados Unidos se ha encargado de profundizar en el debate de la equidad racial, para lo que ha levantado informes y al mismo tiempo una preocupación respecto a la disponibilidad de datos. Evaluar la Agenda desde la perspectiva de género, la capacidad, etnicidad y otras identidades es sin duda importante y urgente. También, reconoce que “un análisis aún más refinado que utilice un desglose multinivel, como el que se centra en las mujeres y la raza en entornos urbanos, probablemente revelaría desigualdades aún más marcadas (...) Otras áreas que merecen una mayor exploración son el uso de datos longitudinales para comprender cómo están cambiando estas desigualdades a lo largo del tiempo.” (Lynch et al., 2021).

Desde SDSN Europa se reconoce que para reducir las desigualdades se deben comprender sus causas y consecuencias, que pueden ser complejas y estar profundamente arraigadas en los sistemas y recursos sociales, económicos, políticos y ambientales. Para eso, la Unión Europea y SDSN adquieren un enfoque multifacético a través de la elaboración de un índice ‘no dejar a nadie atrás’ para reflejar las brechas y diferencias que persisten entre los países europeos e identificar las áreas en las que los responsables políticos deben mantenerse alerta. Está compuesto por 34 indicadores enfocados en cuatro dimensiones: pobreza y privación material; desigualdad de ingresos y respeto de los derechos laborales fundamentales; desigualdad de género; y el acceso y la calidad de servicios (Sachs et al., 2025).

Como un ejercicio de seguimiento y examen de la Agenda 2030, el Índice ODS de SDSN se basa en una serie de indicadores que puntúan el avance en la implementación de los ODS por países y regiones (Sachs, Lafortune y Fuller, 2024). La metodología del Índice ODS cuenta con una herramienta gráfica, los *dashboards* que “pueden ayudar a los responsables de políticas a determinar las prioridades para una acción temprana y supervisar los avances” (Schmidt-Traub, et al., 2017). El desempeño de Chile en el Índice ODS 2024 muestra algunos ODS críticos como puede ser el de Hambre Cero, Reducción de Desigualdades, Acción Climática y Vida Terrestre y otros en estancamiento como el de Pobreza o Educación.

**Figura 1. Tendencia de los ODS en Chile según el Índice ODS 2024**



**Fuente: SDSN Índice ODS, 2024**

La comparación con la versión de 2025 muestra algunas mejoras en los desafíos del ODS 1, el ODS 8 y el ODS 13 pasando de desafíos significativos y mayores a desafíos persistentes. La tendencia del ODS 10 plantea una leve mejora respecto al año anterior. Por otra parte, el ODS 11, el ODS 12 y el ODS 16 plantean un retroceso en su tendencia y sus desafíos.



**Figura 2. Tendencia de los ODS en Chile según el Índice ODS 2025**

### SDG Dashboard and Trends



**Fuente: SDSN Índice ODS, 2025**

El **ODS 1 Fin de la Pobreza** muestra una moderada mejora debido a la superación de la pobreza por ingresos diarios, aunque la tasa de pobreza después de impuestos y transferencias aún se sitúa en un 16,3%. Las cifras nacionales de pobreza a través de la encuesta CASEN (2022) muestra una disminución 4,2% en la pobreza urbana, de 3,8% en zonas rurales y de 3,4% en la pobreza multidimensional, a nivel nacional. Prevalece la pobreza multidimensional, relacionada con educación, salud, trabajo, vivienda y cohesión social, por sobre la de ingresos, la pobreza rural por sobre la urbana, y también la pobreza femenina, migrante e indígena, lo que revela grandes asimetrías, a pesar de las mejoras que muestra la CASEN 2022.

El **ODS 2 de Hambre cero** y seguridad alimentaria, es el único objetivo que ninguno de los 193 Estados miembros de la ONU ha alcanzado o está en vías de alcanzarlo (Sachs et al., 2024). En Chile los grandes desafíos en este ODS se relacionan con la tasa de obesidad y la inseguridad alimentaria. El **ODS 4 de Educación de Calidad** muestra desafíos significativos en Chile en términos de aprendizajes, rezago y deserción, mientras para el **ODS 5 de Equidad de Género**, el INV (2023) destaca los temas de violencia en contra de las mujeres, brechas salariales y de participación laboral. Además, confirma la mayor cantidad de tiempo que destinan al trabajo no remunerado, tareas domésticas y de cuidado. El Índice ODS muestra los desafíos pendientes en materia de brecha salarial, no obstante, destaca positivamente la planificación familiar, la relación entre la media de años de educación recibida por mujeres y hombres, la relación entre la tasa de actividad femenina y la masculina, y los escaños ocupados por mujeres en el parlamento.

Respecto al **ODS 9 de Industria, Innovación e infraestructura**, el INV destaca que el gasto en I+D se mantuvo alrededor del 0,37% entre los años 2016-2018, y bajó en proporción al PIB durante

los años 2019 y 2020, llegando en ambos al 0,34%, lo que lo sitúa en un desempeño decreciente. Por su parte, los datos del SDG Índice exhiben un positivo aumento del indicador de “investigadores e investigadoras” desde 2016 a 2020, y en otros como el acceso a carreteras por la población rural, a internet y la productividad de las universidades. Finalmente, en el **ODS 13 de Acción Climática** se ha visto un estancamiento y retroceso a nivel de indicadores en términos de emisiones, por lo que es necesario establecer vínculos entre cambio climático y gobernanza del desarrollo sustentable para maximizar la eficacia en la acción.

A nivel global, el informe de progreso de los ODS de la Asamblea General de Naciones Unidas (2024), reafirma la lentitud de los progresos y la necesidad de actuar con urgencia en las prioridades establecidas, y con un sistema financiero internacional más equitativo, representativo y eficaz. Para ello, los países deben hacer cambios tangibles en las políticas e instrumentos. Estos coinciden con los mensajes clave del Informe ODS sobre reformar la arquitectura financiera mundial, la necesidad de cooperación global y la urgencia de perseguir las metas de los ODS relacionadas con los sistemas alimentarios y del uso de suelo. En conclusión, los organismos intergubernamentales están de acuerdo en el diagnóstico del escenario actual. No obstante, las realidades de los países son muy heterogéneas y no existe un compromiso medible en muchos de ellos.

Finalmente, los Informes de Desempeño Ambiental de la OCDE (para Chile 2005; 2016; 2024) analizan los avances y las debilidades del compromiso ambiental de los países en la práctica. Según la última versión, Chile logró un importante avance en el marco jurídico de la acción climática gracias a la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) (2022) con el compromiso de reducir a cero sus emisiones de GEI a 2050, aunque las emisiones siguen aumentando (OCDE, 2024). Científicos recomiendan acciones climáticas ambiciosas en aspectos que podrían marcar la diferencia como menos impuestos de carbono (Valdés, et al., 2023). Se están elaborando planes sectoriales y regionales de la LMCC, aunque destaca la necesidad de respaldar financieramente estos planes (OCDE, 2024), también la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) 2050. Dentro de sus recomendaciones se encuentra aumentar la resiliencia frente a eventos de cambio climático, la descarbonización del sector energético y la expansión de las energías renovables, además de objetivos climáticos más estrictos en transporte y construcción, como también disminuir la contaminación atmosférica por gases procedentes de fuentes industriales en el norte (fundiciones de cobre y centrales termoeléctricas) (OCDE, 2024). La implementación de la ley y la estrategia de descarbonización debe estar reflejada prontamente en los avances en el ODS 13.

Considerando estos avances y desafíos a escala global y nacional, consideramos relevante reflexionar sobre los ODS más críticos para Chile. En cada ODS se muestran tendencias de avance o retroceso; principales desafíos; barreras y obstáculos; respuestas positivas; y recomendaciones.

Para eso, la experiencia de los miembros del Consejo de Liderazgo es clave, quienes han desarrollado los capítulos a continuación en relación con sus temáticas de investigación y acción.



## **2. Tendencias y Propuestas: 2025-2030**

**i. ODS 1: Fin de la pobreza**

**ii. ODS 2: Hambre cero**

**iii. ODS 4: Educación de calidad**

**iv. ODS 5: Equidad de género**

**v. ODS 10: Reducción de desigualdades**

**vi. ODS 13: Cambio climático**



## ODS 1: Fin de la pobreza

### i. Los desafíos de una vida con autonomía y participación

Catalina Littin y Miguel Becerra  
Fundación Superación de la Pobreza

#### Tendencias

Según el *Sustainable Development Report* del año 2025, esta meta ha seguido cumpliéndose en Chile. La tasa de pobreza extrema (2,15 dólares por día) sigue en cero, mientras que la de pobreza (3,65 dólares por día) también se ha situado en 0, bajando notablemente desde lo observado en el reporte del año 2024 (4,4%). Sin embargo, el tercer indicador de este Objetivo de Desarrollo Sustentable: la pobreza relativa después de impuestos y transferencias, muestra niveles similares a 2017 (16,3%).

El sistema oficial de medición oficial de pobreza en Chile, representado por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), evidencia un notable éxito en la reducción sostenida de la pobreza por ingresos en las últimas décadas. En su última medición en 2022, este indicador se redujo a 6,5%. También se observa una disminución en la pobreza multidimensional que comenzó a medirse en 2015 y ofrece un prisma más amplio a las manifestaciones de la pobreza más allá del ingreso. Actualmente dicho índice alcanza a un alto porcentaje de la población, 16,7%. Esta brecha nos indica que los datos disponibles deben ser analizados en profundidad para entender su verdadera magnitud en la formulación de soluciones para el desarrollo y la superación de la pobreza.

El enfoque multidimensional para medir la pobreza nos invita a analizarla desde sus consecuencias en distintos ámbitos. Además, hay otros ODS que están estrechamente relacionados con el objetivo de erradicar la pobreza, como son los ODS 2, 8, 10 y 17, los cuales no han arrojado resultados significativos hasta ahora. Por ejemplo, al analizar más de cerca el ODS10 que se centra en la **reducción de las desigualdades**, observamos que es uno de los casos más preocupantes por su resultado. El coeficiente de Gini se mantiene en torno a los 45 puntos desde el año 2015 (44,9), y el Índice de Palma<sup>1</sup> se estanca en los 2,4 puntos, al igual que la tasa de pobreza de personas mayores, que llega al 16,2%.

---

<sup>1</sup> Para mayor referencia de este índice, sugerimos revisar el capítulo del ODS 10: Reducción de desigualdades en este mismo documento.

## Principales Desafíos y Barreras

En un ejercicio de priorización, hemos identificado cuatro desafíos relevantes para la superación de la pobreza:

**1.- El primer desafío consiste en un acuerdo social sobre cómo comprender y abordar la pobreza.** Es fundamental consolidar un diagnóstico consensuado que impulse una estrategia integral para modificar la realidad actual. Esta estrategia debe fomentar la participación del Estado, de las comunidades afectadas como aliadas estratégicas, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Una definición consensuada y participativa es clave para generar soluciones pertinentes, escalables e integradas.

Uno de los desafíos que enfrenta la estrategia de superación de la pobreza radica en la necesidad de cambiar el paradigma para entender el fenómeno de manera compartida. Esto implica ampliar la definición de pobreza y avanzar más allá de la concepción clásica que considera el ingreso monetario como un pilar relevante para acceder a los medios de subsistencia elementales, para tener una vida digna. La pobreza es una experiencia vital que se manifiesta en múltiples dimensiones de la existencia humana.

Alcanzar una determinada cantidad de ingresos al final de cada mes, requiere que las personas recurran a una variedad de recursos y capacidades intelectuales, físicos, relacionales, sociales. Este proceso ocurre dentro de un amplio espacio relacional que abarca lo social, lo familiar y lo comunitario, y se manifiesta a nivel barrial, comunal, regional y nacional. Estas dimensiones relacionales y territoriales se encuentran mediadas por las normas o acuerdos a los que ha llegado la sociedad, las entidades privadas y el Estado. El ingreso mensual de las familias es sólo uno de los resultados de este entramado, mientras que la magnitud de la experiencia es mucho más compleja y profunda que lo que indican los promedios.

Es así como nuestro país ha seguido avanzando en esfuerzos por profundizar su manera de medir la pobreza. La próxima publicación de la encuesta que mide la pobreza en Chile, Encuesta CASEN, incorporará muchas de las recomendaciones que realizó la Comisión Asesora Presidencial de Expertos y Expertas para la Actualización de la Medición de la Pobreza el año 2025, que tuvo como propósito analizar, adecuar y realizar propuestas en torno a la medición de la pobreza. Se estima que, si se incorporaran todos los ajustes de dichas recomendaciones, el indicador de pobreza por ingresos pasaría del 6,5% actual a una estimación del 22,3%, mientras que el de pobreza multidimensional calculado actualmente en 16,9%, pasaría a un 24,6%. No es que la pobreza suba exponencialmente, sino que la medición permite dar cuenta de un grupo mayor de

la población afectado por pobreza por ingresos y/o multidimensional bajo nuevos parámetros más exigentes.

**2.-El *segundo desafío* consiste en brindar certezas a los hogares en situación de pobreza para que puedan movilizar sus valiosos recursos de manera efectiva.** Esto incluye la seguridad de contar con un presupuesto suficiente para cubrir 30 días de alimentación, arriendo, y acceso pertinente a transporte, educación y salud, entre otras necesidades, así como la confianza de que cualquier imprevisto en estos ámbitos podrá ser resuelto por el hogar sin afectar su bienestar. Asimismo, es fundamental garantizar que la formación escolar permita el acceso a niveles superiores de formación profesional o técnica y que esta provea los conocimientos necesarios para enfrentar las exigencias académicas y facilitar la participación en la vida laboral, intelectual, social y económica.

Lo mismo se puede impulsar en otros aspectos que impactan en la calidad de vida de las personas: enfrentar enfermedades graves, tener un trabajo de baja calidad, sentir inseguridad al caminar por las calles y en el propio barrio, o tener una llave conectada al agua potable. Aunque los ingresos pueden mitigar algunas de estas dificultades, son solo un aspecto del complejo circuito de la experiencia de la pobreza. La pregunta clave es: ¿en qué medida podemos asegurar una experiencia de vida equivalente, en las distintas dimensiones del desarrollo humano para toda la sociedad?

**3.- El *tercer desafío* es crear condiciones que permitan a las personas vivir con autonomía.** Esto implica facilitar un circuito de desarrollo de las personas que tenga en cuenta el *ciclo de vida y el contexto histórico*. A lo largo del tiempo, las expectativas y exigencias sociales para tener ciertos grados de estabilidad, tranquilidad e inclusión, han cambiado: hace más de una década completar 8vo básico ofrecía pocas oportunidades laborales; luego, terminar 4º medio se convirtió en un requisito básico, pero hoy, completar estudios superiores es lo que mayormente genera posibilidades concretas de empleo.

Una buena política pública emancipa y facilita la autonomía. Esto abre alternativas, brinda opciones y permite acceder a otros elementos de la lista de prioridades. Una mala política pública, en tanto, puede tener el efecto contrario: paralizar o sacrificar prioridades, lo que puede provocar un proceso de toma de decisiones que se traduzca en pérdidas. En contraste, mayores grados de participación, cohesión social, el acceso a oportunidades y las garantías básicas para la vida fomentan y mejoran los procesos de toma de decisiones y el desarrollo de una sociedad.

**4.- El *cuarto desafío* se centra en que el acuerdo social ofrezca soluciones integrales, que consideren los ciclos de vida y el contexto en el que viven las personas afectadas.** Nuestro

diagnóstico indica que, actualmente, la política social chilena aborda al país de forma sectorial, lo que genera una importante subordinación de la población más vulnerable. Aunque hay un énfasis significativo en áreas como infancia, salud, educación, adultos mayores o mujeres, estas políticas carecen de la sincronía, coherencia y escalamiento necesarios para impulsar mejoras en la calidad de vida de familias que concentran diferentes necesidades según determinantes como la edad, el género o el lugar de residencia, lo que exige soluciones pertinentes y oportunas (Umbrales Sociales para Chile, 2017). Cuando se habla de la multidimensionalidad de la pobreza, no sólo se reconoce que tiene distintas manifestaciones, causas y expresiones, sino también se refiere a que estas dimensiones están íntimamente vinculadas. Por lo tanto, abordar únicamente un aspecto de la pobreza por ingreso resulta insuficiente; las soluciones deben ser integrales.

El país cuenta con el valioso activo de familias y comunidades que despliegan estrategias basadas en sus propios recursos, no sólo económicos, sino también sociales y culturales para alcanzar sus objetivos de bienestar. Sin embargo, las estrategias utilizadas muchas veces implican el sacrificio de importantes recursos como la salud física y mental, el tiempo y el ocio, entre otros, los que son significativos para el bienestar de las personas.

### ***La situación subnacional de distribución y desglose de indicadores***

La pobreza tiene una expresión territorial y regional. Según la encuesta Casen 2022, 12 de las 16 regiones del país presentan una tasa de pobreza por ingresos superior al promedio nacional (6,5%). Al observar la segmentación regional para pobreza multidimensional, nueve de las 16 regiones se encuentran por encima del promedio nacional de 16,9%. En muchas de ellas es posible hablar de una pobreza que se ha vuelto estructural, como es el caso de La Araucanía que desde el año 2006 muestra la más alta incidencia de pobreza por ingresos (salvo el año 2022, donde fue sobrepasada por Ñuble), y también fue la región con mayor pobreza multidimensional los años 2015 y 2017.

Así como los datos regionales son claros, la perspectiva comunal confirma la profunda desigualdad territorial que existe en nuestro país. El Índice de Desarrollo Humano comunal (IDH) elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2024), da cuenta de dichas disparidades: la población nacional está concentrada en comunas con IDH medio-alto y medio-bajo, pero un tercio de todas las comunas del país (116) tienen un IDH bajo. Sin embargo, este tercio concentra sólo el 13,1% de la población. Es así como las comunas más vulnerables y de menor IDH serían en general, las de menor tamaño.



## Propuestas

En vista de lo anterior, el país cuenta con un panorama y un diagnóstico que incluye ciertas definiciones. Sabemos cuáles son las zonas que resultan más vulnerables, conocemos las brechas monetarias existentes en la población, así como las dimensiones y subdimensiones donde la pobreza tiene mayor incidencia. También entendemos que cualquier medida de mitigación de la pobreza debe considerar su multidimensionalidad, los ciclos de vida y los factores transversales que la afectan. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿qué avances son necesarios en los ODS para mover realmente la aguja? ¿Cuáles son los aceleradores que se necesitan?

**Un acelerador clave para superar la pobreza y la inequidad es la implementación de una política pública con enfoque en el territorio y en los ciclos de vida de los hogares vulnerables.** Esto representa un avance necesario hacia un sistema que evite abordar el problema únicamente desde la individualización de las personas y los hogares, sino que integre también las estrategias comunitarias o colectivas de las personas afectadas.

**El fortalecimiento de la autonomía a nivel individual, familiar y comunitario** es uno de los principales aceleradores para impulsar cambios reales en nuestra sociedad. Uno de los grandes problemas que enfrentan los hogares vulnerables, es la necesidad de tomar decisiones sobre su bienestar con recursos limitados, no sólo monetarios. Sin embargo, cuando las personas adquieren y activan más herramientas y recursos, también ponen en práctica procesos que les permiten tomar decisiones que abren nuevas oportunidades, generando así mayores grados de autonomía y bienestar. Por ello, es que consideramos que una buena política pública debe actuar como catalizadora y amplificadora de los recursos y activos presentes en personas, comunidades y territorios para el desarrollo del país.

Existen importantes avances en distintos ámbitos que exigen una mayor integración, coordinación e innovación.

Hemos logrado incorporar importantes avances en diferentes áreas como salud, vivienda, educación, trabajo, seguridad social, entre otras. A modo de ejemplo: las Garantías Explícitas de Salud que han ido mejorando con el tiempo; la ley Ricarte Soto; el Programa Pequeñas Localidades; el Registro Social de Hogares, la gratuidad en la educación superior; la ley de fortalecimiento de la educación pública; la ley Copago Cero; la Pensión Garantizada Universal; y la ley 40 Horas. También se han realizado mejoras en la política habitacional, cambios en la medición de la pobreza, incrementos en el sueldo mínimo, y avances en la discusión de las leyes de Sala Cuna Universal, pensiones y del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Sin embargo, para alcanzar muchos de estos avances, es necesario realizar ejercicios de individualización, presentar antecedentes y demostrar mérito cada vez que se busca acceder a ellos, lo que genera brechas de acceso, desconfianza y malestar en los afectados. Aunque se ha avanzado en disminuir estos “pasos” de acceso, es importante seguir mejorando el sistema.

Todo lo planteado anteriormente apunta hacia la urgente necesidad de implementar un programa integrado, que permita a las personas alcanzar las certezas en las distintas dimensiones de la pobreza, durante sus ciclos de vida y en las situaciones particulares por las que deben atravesar. Para ello, es necesario replantear el modelo de vínculo, relacionamiento y adhesión con la política social, que como sociedad tenemos actualmente. **Para contar con pilares básicos de protección, integrados y situados, es necesario contar con bases claras y consensuadas.**

El año 2030 está cerca y es necesario revertir el estancamiento. Para lograrlo se requieren decisiones que pueden ser incómodas, pero que son necesarias y requieren de la disponibilidad de todos los actores. Por ejemplo, **tenemos una gran deuda en participación ciudadana** de la que nuestra Fundación es testigo a lo largo de todo el país (Fundación Superación de la Pobreza, 2021). De acuerdo con el Segundo Estudio Nacional de Polarizaciones de la Corporación 3xi y Criterios del año 2024 existen avances en la disminución de la polarización, pero persisten importantes ámbitos que nos separan, como el temor a la confrontación política, la evasión del diálogo político, e importantes desencuentros entre personas según sus ingresos o con las personas migrantes. Desencuentros que se van reproduciendo entre los distintos grupos sociales. **Todos factores que merman la posibilidad de encontrarse en un espacio común y es que es en la participación, donde se juega la integración social como uno de los pilares para la superación de la pobreza.**

**Las comunidades más rezagadas cuentan, hoy en día, con una escasa capacidad de incidir sobre la toma de decisiones.** La integración supone, justamente, incrementar esa posibilidad y establecer un vínculo colectivo distinto al que tiene hoy nuestro país. Para avanzar, debemos lograr mirar el país con el mismo prisma, puesto que carecemos de un relato en común en torno a la magnitud integral del problema. Son los acuerdos y compromisos los que permitirán implementar los aceleradores necesarios para que indicadores, como los ODS, comiencen, de una buena vez, a registrar avances importantes.



## **ODS 2: Hambre cero**

### **ii. La inseguridad alimentaria en Chile a través del tiempo**

Rodrigo Yáñez Rojas

RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

#### **Tendencias**

El Objetivo de Desarrollo Sostenible N°2 busca alcanzar un mundo libre de hambre para el año 2030. A nivel global, la tarea es compleja, pues los datos indican que desde el año 2015 la inseguridad alimentaria ha mostrado un aumento considerable, vinculada a una combinación de factores que incluyen la pandemia, los conflictos, el cambio climático y la profundización de las desigualdades (ONU, 2023).

Luego de la pandemia del COVID-19 y un aumento considerable en las cifras, en América Latina y el Caribe la inseguridad alimentaria ha logrado contenerse en los últimos años. Sin embargo, un 28.2% de la población continúa presentando problemas de inseguridad alimentaria moderada o grave (FAO et al., 2024). Al cumplirse casi una década de bajo crecimiento económico (0.8% en promedio a nivel regional) (CEPAL, 2023), la región no ha logrado romper con las barreras de desigualdad y pobreza vinculadas estrechamente a las causas del hambre.

Chile forma parte de este escenario global y regional, por lo cual es importante observar las tendencias del país a través del tiempo. La inseguridad alimentaria, que engloba los problemas de hambre, desnutrición y malnutrición, es un obstáculo para el desarrollo sostenible, pues genera consecuencias en el desarrollo y autonomía de los individuos, lo que se manifiesta en la productividad de ellos y una mayor propensión a contraer enfermedades, entre otras experiencias que los anclan perpetuamente dentro de un ciclo de vulnerabilidad y exclusión.

#### ***La inseguridad alimentaria en Chile a través del tiempo***

La inseguridad alimentaria se refiere a la falta de acceso físico, social o económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer las necesidades dietéticas y las preferencias alimentarias para llevar una vida activa y saludable (FAO et al., 2023).

La inseguridad alimentaria se puede medir usando varios indicadores. Una medición ampliamente utilizada es la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés), que evalúa las experiencias de inseguridad alimentaria de los individuos basándose en sus respuestas a un conjunto de preguntas sobre su acceso a los alimentos. Esta escala es una de las medidas que actualmente utiliza la FAO para reportar el hambre a nivel mundial (FAO, 2016).

Con la escala FIES se reportan principalmente dos niveles de inseguridad alimentaria. La *inseguridad alimentaria moderada*, que incluye a las personas que enfrentan incertidumbre sobre su capacidad para obtener alimentos y pueden verse obligadas a reducir la calidad o cantidad de su dieta debido a la falta de recursos. Y la *inseguridad alimentaria grave*, que identifica a las personas que experimentan hambre o períodos prolongados sin consumir alimentos debido a la falta de acceso a ellos.

En Chile, las preguntas de la escala FIES están incluidas en la encuesta CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional) y permiten ilustrar cómo han variado las cifras de inseguridad alimentaria a través del tiempo. En específico, las olas de los años 2017 y 2022 permiten reportar la evolución de la situación del país, así como vincularla a un conjunto de variables socioeconómicas y demográficas que nos permiten explorar más a fondo los posibles factores determinantes de la inseguridad alimentaria. La tabla 1 resume el comportamiento de las cifras de inseguridad alimentaria moderada y grave en el país a través del tiempo.

### **Principales Desafíos y Barreras**

Los datos promedio a nivel nacional muestran que la inseguridad alimentaria moderada y grave en Chile ha aumentado de aproximadamente un 16% en 2017 al 20% en 2022. De la misma forma, las cifras de inseguridad alimentaria grave, es decir, solo aquellas personas que experimentaron períodos prolongados sin consumir alimentos también aumentaron de 8% a 10% en 5 años.

A nivel de población, los datos indican que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Ambos muestran los mismos niveles de inseguridad a través del tiempo en cualquiera de las medidas que se considere. Al contrario, si se observan diferencias entre aquellos individuos que pertenecen a pueblos indígenas, por sobre aquellos que no. Tomando en consideración los dos niveles de inseguridad alimentaria (moderada y grave), las personas que pertenecen a pueblos indígenas alcanzan un 24% el 2022, superando por más de 10 puntos a aquellos individuos que no se adscriben como pertenecientes a un pueblo indígena.

**Tabla 1: Inseguridad alimentaria en Chile. Por región, zona, género y pertenencia a pueblos originarios años 2017 y 2022<sup>2</sup>**

	Casen 2017		Casen 2022	
	Inseguridad alimentaria moderada y grave	Inseguridad alimentaria grave	Inseguridad alimentaria moderada y grave	Inseguridad alimentaria grave
Promedio nacional	16%	8%	20%	10%
Hombre	16%	8%	20%	10%
Mujer	16%	8%	20%	10%
No pertenece a pueblos indígenas	16%	8%	20%	10%
Pertenece a pueblos indígenas	21%	11%	24%	12%
Rural	14%	7%	19%	9%
Urbano	16%	8%	20%	10%
Región de Arica y Parinacota	19%	9%	19%	11%
Región de Tarapacá	16%	8%	26%	13%
Región de Antofagasta	17%	10%	23%	15%
Región de Atacama	19%	12%	16%	8%
Región de Coquimbo	12%	6%	18%	10%
Región de Valparaíso	16%	8%	19%	9%
Región Metropolitana	18%	9%	22%	11%
Región de O'Higgins	14%	7%	25%	12%
Región del Maule	14%	6%	20%	11%
Región de Ñuble	15%	7%	19%	9%
Región del Biobío	16%	9%	16%	7%
Región de La Araucanía	13%	7%	20%	10%
Región de Los Ríos	10%	4%	17%	8%
Región de Los Lagos	15%	7%	16%	8%
Región de Aysén	12%	6%	15%	7%
Región de Magallanes	8%	4%	12%	6%

**Fuente: Yáñez, Navea y Jara (2024)**

A nivel territorial, las cifras que entrega la encuesta CASEN indican que los espacios urbanos presentan mayores tasas de inseguridad alimentaria en comparación con los espacios rurales, una distribución de casos que rompe con las tendencias tradicionales latinoamericanas, donde

<sup>2</sup> Los valores corresponden a la medición de inseguridad alimentaria utilizando la puntuación bruta (número de respuestas afirmativas) de la escala FIES. Este puntaje puede ser considerado un indicador ordinal de la severidad de inseguridad alimentaria (FAO, 2016).

los territorios rurales tienden a presentar mayores tasas de inseguridad alimentaria (Berdegué et. Al. 2024).

Finalmente, la tabla 1 muestra las diferencias que se establecen entre regiones. La inseguridad alimentaria moderada y grave se concentra principalmente en las regiones de Tarapacá (26%), O'Higgins (25%), Antofagasta (23%), Metropolitana (22%) y el Maule y la Araucanía (20% respectivamente). Los porcentajes pueden ser contraintuitivos en las regiones centrales de O'Higgins y el Maule, al ser territorios que tradicionalmente producen alimentos para el país y la exportación. Asimismo, las cifras de inseguridad alimentaria de las regiones del norte no se condicen con las cifras de pobreza por ingreso, que históricamente se han concentrado en el sur (región de la Araucanía y Ñuble)<sup>3</sup>. La región Metropolitana presenta un aumento considerable en las cifras de inseguridad alimentaria (de 18% a 22%), a pesar de mostrar incluso una disminución en la pobreza por ingresos<sup>4</sup>.

## Propuestas

Las cifras resumidas en la Tabla 1 ayudan a entender una cuestión central: **la inseguridad alimentaria es un problema que está de vuelta en Chile**. Durante años el debate público no ha centrado la atención necesaria en este problema, cuando los datos indican que solo ha adquirido mayor importancia a través del tiempo y cubre a un porcentaje significativo de la población.

¿Cuáles son las razones detrás de este aumento en las cifras a través del tiempo? Siguiendo la tendencia a nivel global, los problemas de crecimiento económico se conectan con los ingresos de los hogares, y esto repercute en la inseguridad alimentaria de los individuos. El debate público del país ha puesto un renovado valor en este espacio de la discusión, y los datos presentados aportan fuerza a la importancia del crecimiento económico para la población.

Sin embargo, hay otros efectos que es necesario explorar con mayor atención, para focalizar las políticas públicas y la forma en que es posible hacer frente a un problema tan urgente como es la alimentación de las personas. Uno de ellos es identificar con mayor detalle cuáles son los hogares que presentan altas cifras de inseguridad alimentaria. ¿Por qué hay altas cifras de inseguridad alimentaria en regiones de producción agrícola? ¿Las altas cifras de inseguridad alimentaria en las regiones del norte se corresponden con grupos específicos? ¿Quiénes experimentan hambre en la región metropolitana?

Por supuesto, tenemos algunas ideas, pero se requieren estudios con mayor precisión para identificar a las personas y hogares que concentran las cifras de inseguridad alimentaria, y con ello focalizar de mejor manera la acción del Estado y las iniciativas vinculadas al mundo privado y

---

<sup>3</sup> De acuerdo con los datos de CASEN (2022), la pobreza por ingresos en Tarapacá fue 11%, en Antofagasta 8%, en el Ñuble 12% y la Araucanía 12%.

<sup>4</sup> De acuerdo con los datos de CASEN (2022), la pobreza por ingresos en la región Metropolitana disminuyó de un 5% a un 4%.

de la sociedad civil. Existen formas de tratar los datos existentes para poder identificar la heterogeneidad a nivel comunal (FAO, 2024), o bien, explorando la correlación de la inseguridad alimentaria con las dimensiones de la pobreza multidimensional (Yáñez et al., 2025). Iniciativas que aportan a seguir profundizando este debate y darle toda la relevancia que merece.

**Identificar con mayor profundidad y heterogeneidad de las dinámicas de la inseguridad alimentaria en la población chilena permitiría comprender las estrategias que utilizan las propias personas para enfrentarla.** Son pocos los estudios que se han realizado a nivel nacional, y la literatura existente muestra que existen diversas estrategias vinculadas a los territorios, desde restringir la diversidad de alimentos que componen la dieta, pasando por una menor inversión en educación y salud, la venta de activos, endeudamiento de los hogares, recuperación de prácticas tradicionales, establecimientos de ollas comunes, hasta la migración (Berdegue et. al, 2024; Fuentes, 2022).

Finalmente, como síntesis y en el contexto de los ODS 2030, frente a la urgencia que adquiere el problema, **el Estado y las organizaciones que trabajan en el tema deben seguir insistiendo en su urgencia comunicacional.** Una medida directa en este sentido es seguir de cerca el problema, con mediciones periódicas y publicación de los resultados que se obtienen de las cifras que entregan, por ejemplo, escalas como la FIES. Una posibilidad que avanza es la inclusión de **la inseguridad alimentaria como indicador de la pobreza multidimensional.** De esta forma, su reporte y seguimiento sería bianual, como se hace con los otros indicadores que actualmente confirman las 5 dimensiones de la pobreza multidimensional en Chile (Educación, Salud, Trabajo y seguridad social; Vivienda y entorno; y Redes y cohesión social).



## **ODS 4: Educación de calidad**

### **iii. Análisis de los avances en Educación de Calidad en Chile**

Patricia Opazo

Red de Campus Sustentable

#### **Tendencias**

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad. En este contexto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas.

Desde 2015, Chile ha implementado diversas políticas y reformas con el propósito de cumplir con los compromisos establecidos en el ODS 4. Entre ellas, destacan iniciativas para mejorar la equidad en el acceso a la educación, fortalecer la calidad de la enseñanza y modernizar la infraestructura educativa. No obstante, el país sigue enfrentando desafíos significativos, tales como la desigualdad en el rendimiento académico entre distintos sectores socioeconómicos, la falta de formación docente continua y la brecha digital, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Desde la adopción de la Agenda 2030, Chile ha mostrado avances significativos en la expansión del acceso a la educación, particularmente en los niveles de educación primaria y secundaria, donde las tasas de matrícula han alcanzado niveles cercanos al 100%. La aprobación de la Ley de Inclusión Escolar en 2015 marcó un punto de inflexión al eliminar el financiamiento compartido y la selección en los establecimientos subvencionados, lo que ha favorecido un acceso más equitativo a la educación.

En cuanto a la educación superior, desde el 2016 se implementó la gratuidad para los estudiantes de menores ingresos provenientes de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país, lo que ha permitido aumentar la participación de estudiantes de sectores vulnerables en la educación terciaria. Hoy el 44% de los estudiantes de pregrado estudian gracias a este apoyo, cuatro veces más de lo que representaba en 2016.

Además, las casas de estudio de educación superior han avanzado en desarrollar diferentes instrumentos voluntarios de monitoreo e implementación de acciones que tributan a diferentes



ODS, como por ejemplo el Acuerdo de Producción Limpia II Educación superior sustentable promovido por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Red Campus Sustentable.

Asimismo, la Red Campus Sustentable desde el año 2018, de manera anual promueve la implementación de RESIES (Reporte y evaluación de la sustentabilidad en la educación superior), herramienta de gestión diseñada para fortalecer el compromiso de las instituciones de educación superior con la sustentabilidad. A través de un modelo estructurado con indicadores y categorías clave, RESIES permite a las IES diagnosticar, medir y mejorar su desempeño en sustentabilidad de forma integral. Su implementación promueve una transformación institucional coherente con los principios del desarrollo sostenible, fomentando oportunidades de aprendizaje para toda la vida con enfoque en la sustentabilidad.

El resultado del último año de implementación, si bien muestra una gran diferencia entre las distintas instituciones participantes, se aprecia también que el promedio es cercano al 50% de avance, lo que refleja el impacto del trabajo realizado en red. Lo mismo se puede ver reflejado en la revisión del avance histórico, que en los últimos cuatro años, se ha evaluado un avance progresivo y acelerado en la implementación de diferentes acciones reflejadas en el instrumento.

Figura. Resultados RESIES 2024

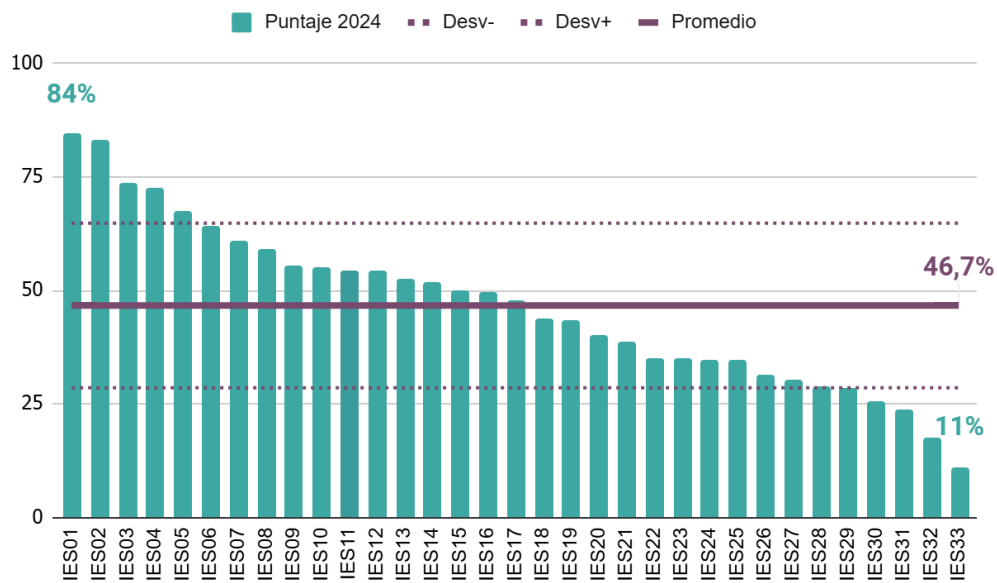
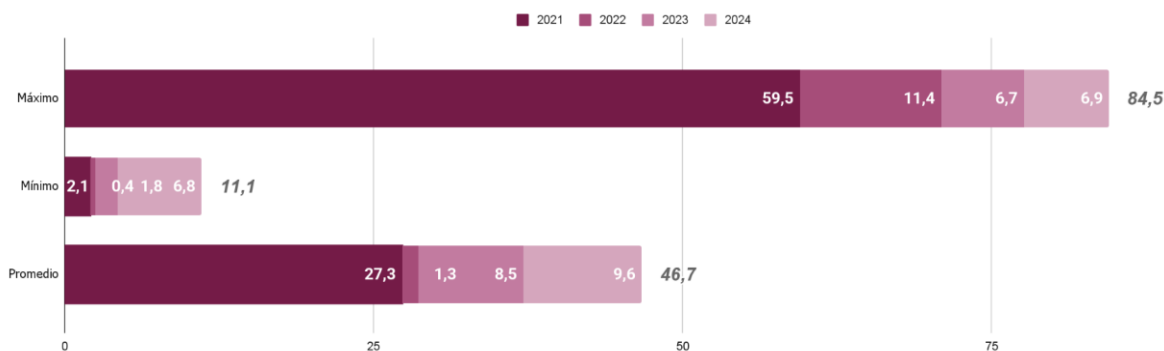


Figura X. Resultados históricos 2021-2024 RESIES, puntajes mínimos, máximos y globales.



## Principales Desafíos y Barreras

EL ODS 4 aún muestra grandes desafíos que abordar antes del 2030 que tienen relación con la calidad de la educación entregada, brechas de aprendizajes, desigualdades económicas, de recursos e infraestructuras y falta de formación continua a docentes.

1. **Calidad Educativa:** A pesar de la alta cobertura, persisten brechas en la calidad de la educación. Los resultados de aprendizaje no han mejorado significativamente en la última década, y Chile continúa por debajo del promedio de los países desarrollados en evaluaciones internacionales
2. **Desigualdades Socioeconómicas, recursos e infraestructura:** Existen disparidades en el rendimiento académico vinculadas al nivel socioeconómico de los estudiantes, lo que refleja una segregación en el sistema educativo. La concentración de estudiantes de bajos recursos en ciertas escuelas perpetúa ciclos de pobreza y limita las oportunidades educativas. Además de enfrentar deficiencias en infraestructura y recursos pedagógicos, lo que afecta la calidad de la enseñanza.
3. **Falta de Formación Docente Continua:** La ausencia de programas de desarrollo profesional para docentes dificulta la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras y efectivas.
4. **Trayectoria formativa en sustentabilidad en Educación Superior:** la incorporación sistemática de esta temática en la trayectoria educativa de las y los profesionales en formación sigue siendo un desafío persistente. En muchas instituciones de educación superior, la sustentabilidad aún no se aborda con la transversalidad ni la urgencia que exige el contexto actual, limitando su integración en los planes curriculares y en la formación de competencias clave para enfrentar los retos sociales, ambientales y económicos del siglo XXI.
5. **Marco regulatorio:** Una de las principales brechas en la educación superior respecto a la sustentabilidad es la ausencia de exigencias formales en los marcos regulatorios. Actualmente, no existe obligatoriedad explícita desde instrumentos como la acreditación institucional o la Ley Marco de Educación Superior que obligue a las IES a incorporar la

sustentabilidad en su gestión y formación. Esto deja el avance en manos de la voluntad institucional, generando desigualdades en el compromiso y profundizando la necesidad de una política pública que asegure su incorporación transversal y sistemática.

Algunos de los proyectos e iniciativas que ha implementado Chile para abordar estas problemáticas son:

- **Nueva Educación Pública:** La Ley N° 21.040 de 2017 eliminó la administración municipal de las escuelas, creando una estructura estatal especializada para mejorar la calidad, equidad e inclusión en la educación
- **Incorporación al Comité Directivo de Alto Nivel del ODS-4:** En 2023, Chile se unió a este comité, reafirmando su compromiso con la educación de calidad y participando activamente en la agenda global
- **Integración de Tecnologías Educativas:** Se han desarrollado programas para incorporar tecnologías digitales en el aula, buscando mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

## Propuestas

Aunque Chile ha logrado avances significativos en el acceso a la educación desde 2015, persisten desafíos en términos de calidad y equidad. Abordar las barreras identificadas y fortalecer las acciones positivas serán cruciales para cumplir con el ODS 4 y garantizar una educación de calidad para todos los chilenos.

Estas disparidades reflejan **la necesidad de políticas focalizadas que aborden las particularidades de cada región**. Además, **se debe fortalecer la Formación Docente**, implementando programas de desarrollo profesional continuo para docentes, enfocándose en metodologías pedagógicas innovadoras y adaptativas.

**Se debe también garantizar el acceso equitativo a tecnologías de la información y comunicación en todas las regiones**, asegurando que todos los estudiantes puedan beneficiarse de herramientas digitales en su aprendizaje. Para reducir la inequidad territorial se deben descentralizar los recursos, asignando recursos de manera equitativa, considerando las necesidades específicas de cada región, para reducir las disparidades en infraestructura y calidad educativa.

**Seguir promoviendo la Inclusión Educativa**, desarrollando políticas que fomenten la integración de estudiantes de diversos contextos socioeconómicos, culturales y étnicos, asegurando una educación inclusiva y equitativa. Finalmente, evaluar y ajustar Políticas Educativas, estableciendo

mecanismos de monitoreo claros y continuos, permitiendo ajustes basados en evidencia para mejorar su eficacia.

Todos estos desafíos se presentan también en la estrategia de implementación de la Agenda 2030 elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentado durante el 2024.



## **ODS 5: Equidad de género**

### **iv. Por una Administración Pública y un sector privado equitativo: avances y desafíos**

Vanesa Muñoz, Observa Bio-Bio.

Luciana Mitjavila, Hub de Negocios Sostenibles de la Universidad Andrés Bello.

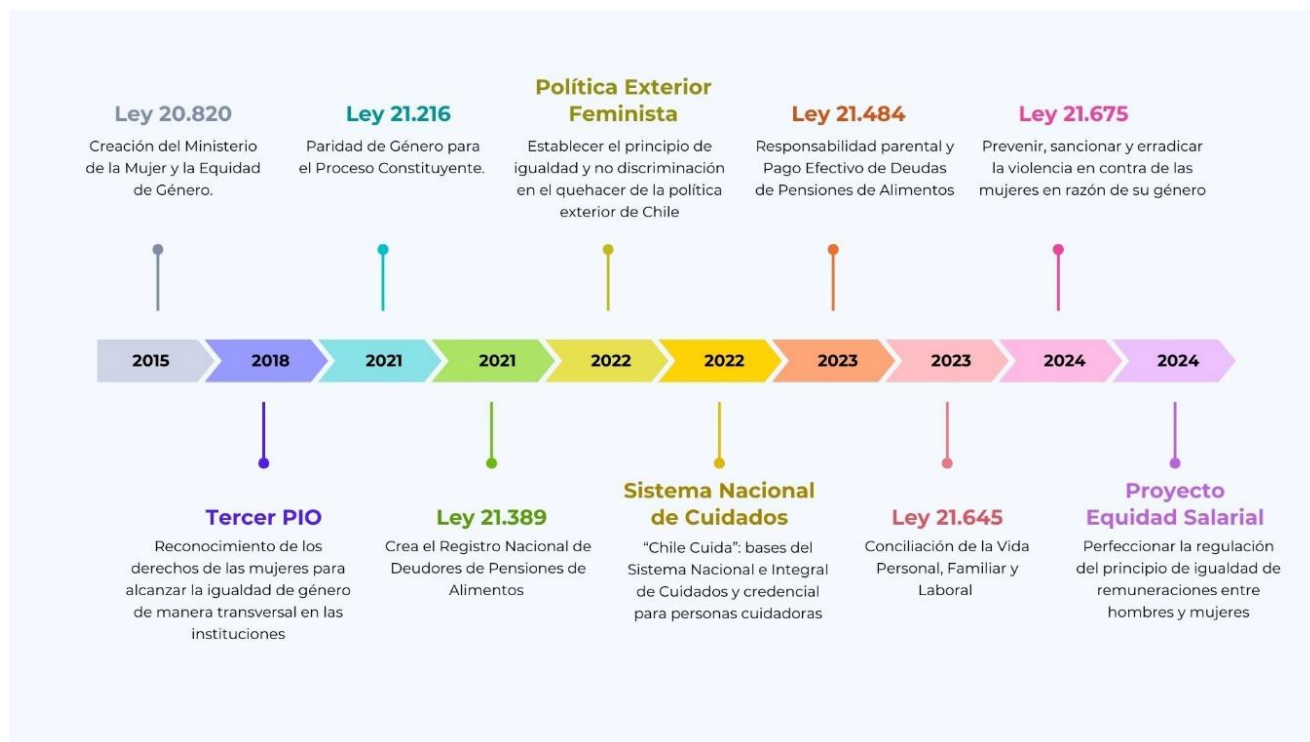
#### **Tendencias**

El ODS 5 busca la igualdad entre los géneros. Dentro de sus metas principales, incluye reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a través de políticas públicas, infraestructura adecuada y protección social, así como fomentar la participación efectiva de las mujeres en todos los niveles de liderazgo y toma de decisiones.

En este contexto, los Estados deben implementar acciones específicas para corregir desigualdades estructurales y garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Para alcanzar este objetivo, las administraciones nacionales y subnacionales tienen la responsabilidad de promover cambios legislativos, estructurales y culturales. Esto incluye la redistribución del poder, visibilización de problemáticas, creación de políticas inclusivas y un compromiso sostenido por parte de las instituciones públicas y privadas.

El Estado chileno se encuentra comprometido con acortar las brechas de género y que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. A modo de ejemplo, algunos de los hitos en esta materia son los que se muestran en la figura a continuación.

**Figura 5: Hitos en materia de brechas de género, Estado de Chile**



**Fuente: Elaboración propia**

Otra gran brecha y oportunidad es poder desarrollar un entorno que promueva una mayor presencia de mujeres en el mundo privado, con salarios equivalentes a los hombres frente a un mismo desafío, también como una gran oportunidad de poder hacer crecer la economía a través de la innovación.

**Tabla 2: Participación de mujeres en empresas y brechas salariales**

	2021 (%)	2024 (%)	Cambio (%)
Mujeres trabajadoras	40,1	39,2	-2,2
Mujeres gerentas de primera línea	20,8	23,6	+13,5
Directoras	13,0	24,0	+84,6
Brecha salarial de género: Administrativo y medio	9,3	9,4	+0,1
Brecha salarial de género: Ejecutivos	11,0	9,7	-11,8

**Fuente: Sexto Reporte de Indicadores de Género en las Empresas de Chile 2024, Fundación Chile Mujeres**

La presencia de mujeres trabajadoras es un 39,5%, 11 puntos porcentuales menos que su representación en la población. Este gap demuestra las oportunidades que tenemos en torno a

desarrollar un ambiente más inclusivo. Adicionalmente, si analizamos la presencia de mujeres en roles de liderazgo, su presencia asciende el 23,6% y en directorios un 24%, lo que evidencia la necesidad de preparar más mujeres en competencias para los roles directivos. Asimismo, también evidencia una necesidad de crear una cultura organizacional que compatibilice mejor los roles de las mujeres con los cuidados, que se encuentran con una fuerte asignación femenina. Esta cuenta pendiente podría viabilizar capacidades y podría aportar diversidad y una mirada diferente en la toma de decisiones de la empresa. Importantes avances se han visto con la presencia de mujeres en directorios, incrementando un 7,7% en un año.

La tendencia coincide con los indicadores globales. En 2024, el último Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial arrojó que Chile avanzó seis puestos respecto al año anterior, ocupando el cuarto lugar en materia de paridad de género en América Latina. También redujo su brecha general en 8,3 puntos porcentuales, aunque la brecha de género en cargos ejecutivos y de liderazgo sigue siendo una preocupación. Frente a los nuevos liderazgos en países como EE.UU., estas políticas podrían tender a ir en retroceso, por lo que se refuerza la necesidad de dar robustez a estas políticas en Chile y Latinoamérica a través de marcos legales que las sustenten a largo plazo, mostrando el potencial que puede tener una economía inclusiva en el desarrollo sustentable de un país.

En relación con la brecha salarial entre mujeres y hombres, se ve una tendencia a la disminución de esta a niveles ejecutivos y un estancamiento en cargos administrativos y medios.

### **Principales Desafíos y Barreras**

A pesar de los avances, Chile aún tiene un largo camino por recorrer:

- Desigualdad en cargos de poder: Se necesita acelerar la participación femenina en cargos de poder a nivel privado y público.
- Implementación de las normativas recientes para poder aprovechar los beneficios.
- Desarrollar mayores incentivos y normativas a empresas que promuevan la equidad en diferentes niveles organizacionales.
- Desarrollar una hoja de ruta con metas que reduzcan estas brechas y permita permear a los diversos sectores de población e instituciones en el país.

Persisten las siguientes barreras:

1. **Subrepresentación en cargos directivos:** El 38% de los cargos directivos municipales son ocupados por mujeres, frente a un 62% por hombres.

2. **Falta de corresponsabilidad parental:** Solo el 11% de los municipios dispone de planes de corresponsabilidad parental, una herramienta clave para equilibrar las responsabilidades familiares y laborales.
3. **Uso limitado de postnatal parental:** Un 29% de los municipios reportan casos de funcionarios que han utilizado este beneficio.

### ***Avances en la Administración Pública Local***

Observa Biobío reconoce no solo la importancia de implementar políticas en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sino también de trabajar y fortalecer la temática al interior de la administración pública. Para ello se analiza cómo los municipios de Chile han contribuido a esta materia.

Según las Radiografías Nacionales de Equidad de Género e Inclusión Social Municipal de 2022 y 2024, se han identificado los siguientes progresos en el ámbito municipal:

1. **Incremento en la representación femenina:** En 2024, las mujeres representaron el 48% del total de funcionarios municipales, en comparación con el 46,8% registrado en 2022.
2. **Creación de oficinas de género:** El 71% de las municipalidades cuenta con oficinas o departamentos de género, cuatro puntos porcentuales más que en 2022.
3. **Capacitaciones sobre violencia de género:** El porcentaje de municipios que realizan talleres y capacitaciones sobre esta temática aumentó de un 35% en 2022 a un 48% en 2024.
4. **Protocolos contra acoso:** Un 67% de los municipios cuenta con protocolos para abordar denuncias de acoso laboral y sexual, superando el 51% registrado previamente.

### **Propuestas**

Para consolidar una gestión municipal más equitativa, se proponen acciones en tres áreas clave:

1. **Participación laboral:**
  - Promover oportunidades laborales igualitarias para las mujeres.
  - Diseñar programas que incentiven la corresponsabilidad en la crianza y el trabajo doméstico.
  - Fomentar la inclusión de mujeres en roles de liderazgo.
2. **Prácticas de igualdad:**
  - Identificar y diagnosticar brechas de género para orientar cambios internos.
  - Incorporar la transversalización del enfoque de género en la planificación y gestión municipal.
  - Incorporar campañas educativas y capacitaciones sobre igualdad de género.



- Colaborar con otras instituciones públicas para unificar estrategias.

### 3. **Protocolos contra acoso laboral y sexual:**

- Difundir y aplicar adecuadamente los protocolos existentes.
- Establecer mecanismos efectivos para la denuncia y sanción de casos de acoso.
- Fomentar una cultura laboral libre de violencia de género.

El cumplimiento del ODS 5 requiere no solo asegurar la participación plena de las mujeres en la esfera pública, sino también garantizar su acceso a oportunidades igualitarias en el ámbito laboral y de liderazgo. Si bien las cifras muestran avances, es evidente que la paridad aún está lejos de alcanzarse en la administración pública chilena.

**Es imperativo que los municipios refuercen sus políticas de igualdad, adopten normativas inclusivas y establezcan plazos claros para incrementar la representación femenina en todos los niveles de gestión.** Asimismo, deben priorizar el diseño de **estrategias que fomenten la corresponsabilidad parental** a fin de contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, además de asegurar entornos laborales seguros y libres de violencia.

Solo mediante un esfuerzo conjunto y sostenido será posible transformar las estructuras actuales, construyendo una administración pública verdaderamente equitativa que sirva como ejemplo para el resto de la sociedad.



## **ODS 10: Reducción de desigualdades**

### **v. Una mirada del ODS 10 en el contexto chileno**

Juan Páez

Instituto de Políticas Públicas, Universidad Católica del Norte

#### **Tendencias**

Reducir la inequidad entre y dentro de los países es un aspecto crítico para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (Sachs, et al, 2024). La desigualdad interna tiene efectos adversos en el desarrollo de la sociedad en relación con el bienestar y las oportunidades para sus miembros. En relación a esta problemática global, el ODS 10 propone metas relevantes y medibles, con el fin de monitorear el progreso en esta dimensión de la sustentabilidad global y territorial.

Considerando sus características locales, Latinoamérica es uno de los continentes con mayor nivel de desigualdad, tanto histórica como reciente (Acemoglu & Robinson, 2012; Cepal, 2024). Particularmente, Chile es un caso ampliamente documentado debido a su rápido crecimiento económico y reducción de la pobreza durante la década de 1990 e inicios de la década del 2000. Sin embargo, esto no se ha relacionado con una disminución de la desigualdad de ingresos entre la población (López & Miller, 2008). Estos niveles de desigualdad se han expresado a través de distintos grupos poblacionales, considerando características étnicas, dimensiones geográficas y diferencias de género (Agostini, et al, 2010, Paredes, et al. 2016 & Ministerio de Hacienda, et al, 2023).

Recientemente, el reporte anual de SDSN (Sachs, et al, 2025) señala dos aspectos a considerar en el contexto chileno. En primer lugar, se evidencia un retroceso en su evaluación temporal, indicando que el ODS 10 ha empeorado significativamente en los últimos años. En segundo lugar, aplicando la metodología “SDG Index Dashboard”, agrupan el ODS 10 en la categoría “mayores desafíos”, indicando aspectos críticos para el cumplimiento de la meta.

#### **Principales Desafíos y Barreras**

##### ***Índice de Gini: Comparativa internacional de la desigualdad***

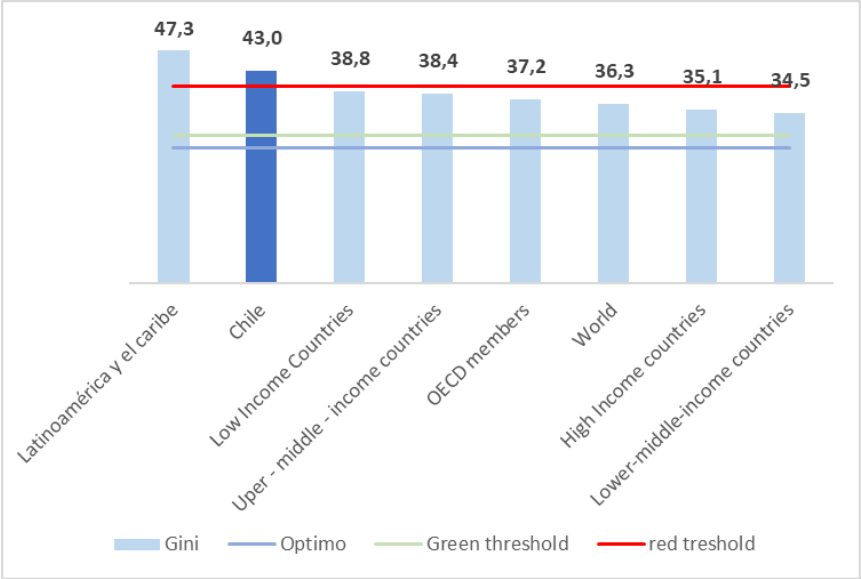
El coeficiente o índice de Gini mide la desigualdad de un área geográfica, el cual ha sido ampliamente usado para evaluar la desigualdad dentro de los países y comparar sus resultados. Su rango varía entre 0 y 100, lo cual permite identificar diferentes niveles de concentración de

ingresos. Un valor 0 representa una situación de perfecta igualdad, mientras que un valor de 100, representa una situación de completa concentración económica.

La figura 1 muestra el cálculo del índice de Gini para Chile, los umbrales establecidos por la SDSN y World Bank, junto al cálculo del índice en otras unidades territoriales agregadas para comparación de resultados. Según la estimación, el valor del índice de Gini en Chile es 43. Este valor sobrepasa todos los umbrales críticos propuestos por el reporte, incluyendo el “Red Threshold”, lo cual señala que el país se enfrenta a desafíos sustanciales en relación a la distribución de sus ingresos.

Bajo una comparativa internacional, Chile se posiciona entre los países con mayores niveles de desigualdad de ingresos. La figura 1 compara el resultado del índice de Gini con diferentes agregados territoriales. Se observa que Chile solo tiene un valor menor en desigualdad de ingresos en comparación con el promedio de Latinoamérica. Por otro lado, Chile obtiene un valor más alto en desigualdad de ingresos en comparación al promedio de países de la OCDE, y al promedio de desigualdad en países de ingresos bajos, países de ingresos medios bajos, países de ingresos medios altos, países de ingresos altos y el promedio mundial.

**Figura 6. Comparativa internacional del índice de Gini**



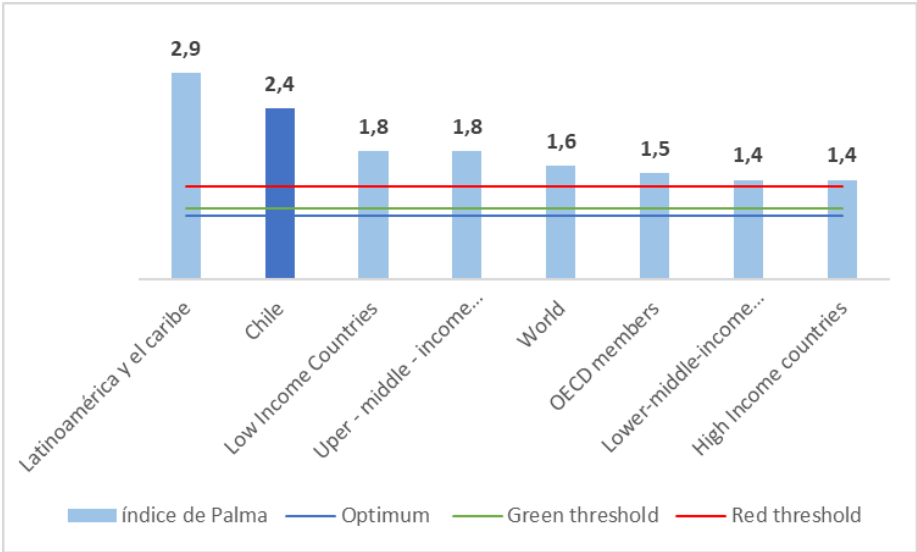
**Fuente:** Elaboración propia en base a datos del Sustainable Development Report (Sachs, et al, 2025).

**Ratio de Palma: Concentración de los ingresos en primer decil**

En complementariedad al índice de Gini, la ratio de Palma mide la razón entre el ingreso del último decil y el ingreso total de los primeros 4 deciles de la población, distribuida según niveles de ingreso. De esta forma, un valor elevado del indicador muestra una mayor concentración en la parte superior de la distribución, en relación al 40% más pobre de la población. Los umbrales de este indicador propuestos por el reporte SDSN, son los siguientes: el óptimo es un valor de 0,9, el “green threshold” que determina la primera advertencia de criticidad del indicador es de 1, mientras que el “red threshold”, que expone el umbral a partir del cual el indicador exige un desafío crítico es de 1,3.

En este sentido, la figura 2 muestra la comparación de la ratio de Palma en Chile, el valor del índice en diferentes agregados territoriales y los umbrales de evaluación. Se observa que, en Chile el 10% más rico de la población, en total, captura 2,4 veces más ingresos que el 40% más pobre de la población. También se observa que, en Chile el valor del indicador sobrepasa sustancialmente cada uno de los umbrales de evaluación, clasificando al territorio en un estado crítico con respecto a sus metas de desarrollo sustentable relacionado a la concentración de ingresos en solo un segmento de la población. En comparación, Chile presenta un mayor desbalance de ingresos con comparación al promedio de países OCDE, el promedio de países de ingresos altos, medios altos, bajos y medios-bajos. En cambio, solo presenta mejores resultados en comparación al promedio de Latinoamérica superando únicamente al bloque territorial que exhibe mayores brechas de desigualdad a nivel mundial.

**Figura 7. Comparación internacional del Ratio de Palma.**



**Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sustainable Development Report (SDSN, 2025).**

### ***Expansión (o contracción) del ingreso de los hogares más pobres***

Con el fin de observar la trayectoria de los ingresos de la población con menor disponibilidad de recursos, la tabla 1 muestra el ingreso monetario promedio entre el periodo 2017 – 2022, del total de hogares y de la población pertenecientes a los 4 primeros deciles según distribución de ingresos, clasificada en diferentes segmentos. A su vez, se muestra la variación promedio anual de los ingresos monetarios del promedio de hogares pertenecientes a cada segmento. Al observar la trayectoria de ingresos monetarios de los primeros cuatro deciles de la población, se observa una significativa caída durante el año 2020, atribuible a efectos socioeconómicos de la Pandemia Covid-19. Sin embargo, se observa también una recuperación de los ingresos durante el periodo 2022. En efecto, entre el año 2017 – 2022, los ingresos monetarios del 40% de los hogares más pobres del país incrementaron a una tasa promedio anual de 1%. En comparación, los ingresos monetarios de los hogares que están bajo el umbral del 4 decil crecieron en los últimos 5 años a una tasa mayor que los ingresos promedios del país, los cuáles en promedio experimentaron una reducción de un 0,1% anual.

Al comparar diferentes segmentos poblaciones dentro de los primeros 4 deciles de distribución de ingresos, se observan diferencias entre los grupos. En primer lugar, se muestra que los ingresos en el área urbana han crecido a una mayor velocidad en comparación a los ingresos de hogares rurales pertenecientes a los 4 primeros deciles. Más aún, el crecimiento de los ingresos en el área rural es negativo, lo que evidencia que, a pesar del aumento en el último periodo, no se ha alcanzado el umbral de ingresos que existía en el periodo antes de la pandemia. Al diferenciar los ingresos según el sexo de la persona que cumple el rol de jefatura de hogar, se observa un mayor crecimiento en hogares con jefas de hogar, sin embargo, los ingresos monetarios más altos se observan en hogares cuyo jefe es hombre. También, se observan amplias diferencias regionales en la expansión de ingresos en hogares más pobres<sup>5</sup>, lo cual se expresa en que, en 8 de 16 regiones el crecimiento fue negativo en el periodo 2017 – 2022.

### **Propuestas**

Chile enfrenta grandes desafíos relacionados a la sustentabilidad, siendo una de las dimensiones más críticas la reducción de las desigualdades. Al igual que el promedio de Latinoamérica, Chile presenta adversos resultados en el índice de Gini y el índice de Palma, que en su conjunto indican una alta concentración de recursos en la parte alta de la distribución. Históricamente, Latinoamérica ha presentado altos niveles de desigualdad, relacionado a aspectos institucionales. En este contexto, Chile, a pesar del gran crecimiento durante las últimas décadas, no ha logrado resolver el problema de la desigualdad. Asimismo, a pesar de que el crecimiento del ingreso

---

<sup>5</sup> Crecimiento 2017 - 2022 del ingreso monetario en hogares menores o iguales al 4° decil: R. I (-2,3%), R. II (-3,0%), R. III (0,4%), R. IV (0,5%), R. V (-1,7%), R. VI (-0,2%), R. VII (-0,5%), R. VIII (1,8%), R. IX (-0,5%), R. X (0,9%), R. XI (-0,3%), R. XII (-1,9%), RM (0,5%), R. XIV (2,5%), R. V (0,6%), R. XVI (0,9%).

monetario ha sido mayor en hogares con más carencias de recursos, esta convergencia ha sido insuficiente para reducir la desigualdad de ingresos del país. A su vez, se ha observado que la desigualdad de ingresos ha sido agravada por los efectos socioeconómicos del Covid-19.

**Tabla 3. Ingresos monetarios del hogar 2017 - 2022**

	Variación 2017- 2022	Variación promedio anual 2017- 2022
Promedio nacional	-0,3%	-0,1%
= < 4 decil	4,9%	1,0%
= < 4 decil (urbano)	5,7%	1,1%
= < 4° decil (rural)	-2,6%	-0,5%
= < 4° decil (jefatura hogar hombre)	2,4%	0,5%
= < 4° decil (jefatura hogar mujer)	10,4%	2,0%

**Fuente: Elaboración propia en base a Casen 2017, 2020 y 2022 (\$ nov. 2022)**

Además de los efectos negativos de la desigualdad en la falta de cohesión social, desde una perspectiva del desarrollo sostenible es clave estudiar la interrelación del ODS 10 con otras dimensiones y sus efectos adversos. Por ejemplo, la implicancia de la concentración de ingresos en la capacidad de las familias más vulnerables para sobrepasar umbrales de pobreza, vulnerabilidad, como también en su capacidad para superar umbrales de inseguridad alimentaria. A su vez, conocer las potenciales del avance de otras dimensiones como el acceso a servicios básicos, ciudades y comunidades sostenibles, educación de calidad (ODS 4) y salud (ODS 3) y su

impacto en el desarrollo de familias más vulnerables, es clave para encontrar medidas que reduzcan los niveles de desigualdad del país.

Finalmente, **resulta indispensable el reconocimiento de la diversidad territorial para el avance del ODS 10. Se ha evidenciado que durante el periodo 2017 – 2022, que el 50% de las regiones del país han presentado un decrecimiento en el ingreso monetario de las familias con menores recursos.** En esta vía, la política pública debe enfatizar en buscar soluciones considerando la heterogeneidad en las capacidades locales y sus necesidades de desarrollo. Pensar localmente para obtener un progreso a nivel agregado.



## **ODS 13: Acción Climática**

### **vi. Acelerar avances con sentido de urgencia en Acción Climática en Chile**

Margarita Ducci – Pacto Global Chile

#### **Tendencias**

No hay forma de detener el cambio climático sino a través de un cambio de paradigma con la modificación profunda de nuestro diario vivir, el sistema productivo, la incorporación de tecnologías limpias y por supuesto los hábitos de consumo. Si bien hoy existe un compromiso compartido por gran parte de las naciones y organizaciones internacionales para avanzar en esa línea, la realidad nos muestra que debemos acelerar el paso con decisión y convicción.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de la Agenda 2030 tiene como meta principal combatir el cambio climático y sus efectos, promoviendo la adopción urgente de medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptar las sociedades a los impactos del cambio climático.

Según datos actualizados, la década de 2010 a 2020 ha sido la más calurosa registrada, con una temperatura media mundial 1,1°C superior a la del período preindustrial. De hecho, el Servicio de Cambio Climático Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han confirmado que se han reportado las temperaturas promedio globales más altas desde que se tiene registro.

Combatir el cambio climático y cumplir los compromisos ambientales internacionales implica invertir en América Latina y el Caribe entre el 7% y el 19% del PIB anual. Es crucial destacar entonces que, a pesar de los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se proyecta un aumento del 3% para 2030, lo cual sigue siendo absolutamente insuficiente para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

En este contexto, Chile, un país vulnerable a fenómenos climáticos extremos, se encuentra en un momento clave para avanzar en la implementación de políticas públicas, acciones empresariales y compromiso social en torno a la Acción Climática.

Desde 2015, año en que Chile se comprometió al Acuerdo de París, ha mostrado avances importantes en la formulación de políticas climáticas y la incorporación de los ODS en su agenda pública. No obstante, los desafíos son considerables, y es necesario intensificar los esfuerzos para



cumplir con las metas del ODS13, especialmente en el período 2025-2030, cuando las emisiones globales deben reducirse significativamente para evitar los peores efectos del cambio climático.

En Chile se han ido adoptando una serie de políticas climáticas que marcan el inicio de un proceso de transición hacia una economía más sostenible y baja en carbono. Algunos hitos relevantes incluyen:

**1. Ley Marco de Cambio Climático (2022):** Chile aprobó una ley que establece objetivos claros para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y para la adaptación al cambio climático, con metas de descarbonización para 2050, el compromiso de lograr una economía carbono neutral y una reducción de emisiones de 25% para 2030 en relación con los niveles de 2007.

**2. Descarbonización y Energías Renovables:** Chile ha sido líder en la incorporación de energías renovables no convencionales (ERNC) en su matriz energética, destacando a nivel mundial como un caso de éxito en la transición energética. Según el Ministerio de Energía, hoy la capacidad instalada de energía solar y eólica ha aumentado en un 50%, y el 42% de la electricidad en Chile proviene de fuentes renovables. Se espera que esta cifra se incremente a más del 70% para 2030.

**3. Compromisos Internacionales:** Chile ha reforzado su compromiso con los objetivos globales de mitigación del cambio climático. En su Contribución Nacional Determinada (NDC), el país se comprometió a reducir sus emisiones en un 30% para 2030 en comparación con los niveles de 2007, con un objetivo de descarbonización al 100% de la matriz eléctrica hacia 2040.

A pesar de estos avances, existen tendencias contradictorias. Por un lado, se observan importantes avances en la descarbonización de la matriz energética y en la implementación de políticas climáticas, pero por otro, existen desafíos estructurales que obstaculizan el progreso. Estos incluyen la alta dependencia de los combustibles fósiles en sectores como el transporte y la minería, las dificultades para financiar la transición y la falta de coherencia en algunas políticas públicas a nivel local.

**4. COP30:** realizada en Belem, Brasil, representa un hito clave al cumplirse 10 años del Acuerdo de París. Se ha enfatizado la necesidad de que cada país tenga Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) 3.0, ambiciosas, alineadas a 1,5°C, reforzando mitigación, adaptación, transición justa y financiamiento.

El corazón de la discusión en la COP30 ha sido el financiamiento, tanto para mitigación como para adaptación. Tras la decepción de la COP29 en Bakú, donde solo se aseguró una meta de 300 mil

millones de dólares anuales (muy por debajo de las necesidades reales que sobrepasan los billones de dólares), en Belém se intenta alcanzar la "Hoja de Ruta de Bakú a Belém".

Esta hoja de ruta busca movilizar al menos 1,3 billones de dólares (trillions) anuales. Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con escepticismo. Para las empresas que buscan financiamiento para proyectos verdes, esto es crítico: sin un acuerdo claro sobre la provisión de fondos públicos (Artículo 9.1), el apalancamiento de capital privado se vuelve más riesgoso y costoso.

Chile, junto a otros 11 países (incluyendo Brasil, Alemania y Francia), firmó la primera declaración estatal sobre la Integridad de la Información Climática.

En un entorno corporativo donde el greenwashing es un riesgo reputacional mayor, este acuerdo político señala una tendencia hacia regulaciones más estrictas sobre la veracidad de los datos climáticos y los reportes de sostenibilidad.

**5. NDC 3.0:** Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son el principal instrumento mediante el cual los países comunican sus compromisos para enfrentar el cambio climático en el marco del Acuerdo de París. En el caso de Chile, la NDC representa una hoja de ruta que orienta la mitigación de emisiones, la adaptación a los impactos climáticos y los medios para implementar estas acciones, integrando además principios de equidad, justicia climática y coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Chile presentó su primera NDC en 2015, la actualizó de manera sustantiva en 2020 y la fortaleció nuevamente en 2022, incorporando metas específicas de reducción de metano y ajustes metodológicos alineados con las recomendaciones del IPCC. Este proceso continuo refleja la obligación establecida por el Acuerdo de París: elevar la ambición cada cinco años. En septiembre de 2025, el país publicó una nueva actualización, la NDC 2025-2035, orientada tanto a consolidar avances como a corregir brechas persistentes.

El compromiso central de Chile es avanzar hacia la carbono-neutralidad a más tardar en 2050, objetivo establecido por la Ley Marco de Cambio Climático. Para ello, la NDC fija una serie de metas cuantificadas. En materia de mitigación, Chile define un presupuesto máximo de emisiones al 2030 cercano a las 95 MtCO<sub>2</sub>e, con un sendero decreciente que permite proyectar una reducción sostenida hacia 2035, cuando se establece un segundo presupuesto nacional. Estas metas se articulan con instrumentos como la Estrategia Climática de Largo Plazo, los Planes Sectoriales de Mitigación y los Planes Regionales de Acción Climática.

La NDC también incorpora compromisos clave por sectores:

**Energía:** expansión acelerada de energías renovables, retiro del carbón y electrificación del consumo final.

**Transporte:** metas de electromovilidad para vehículos livianos, transporte público y maquinaria pesada.

**Residuos:** fortalecimiento de la economía circular, implementación de la Ley REP y reducción de residuos orgánicos.

**Procesos industriales, agricultura y bosques:** reducción de metano, captura de carbono en bosques nativos, y restauración de ecosistemas.

En adaptación, Chile reconoce su alta vulnerabilidad frente a sequías prolongadas, incendios, inundaciones, pérdida de biodiversidad y retroceso de glaciares. La NDC establece prioridades en gestión hídrica, infraestructura resiliente, protección de ecosistemas, prevención de desastres, adaptación basada en ecosistemas y fortalecimiento de capacidades regionales. Estos compromisos se alinean con la Estrategia Nacional de Adaptación y los planes sectoriales recientemente actualizados.

Asimismo, la NDC incluye un capítulo dedicado a los medios de implementación, que abarca financiamiento climático, desarrollo tecnológico, fortalecimiento de capacidades, participación ciudadana y gobernanza multinivel. El Ministerio del Medio Ambiente ha avanzado en institucionalizar esta gobernanza a través de la Ley Marco, lo que asegura estabilidad para el monitoreo, reporte y evaluación de los compromisos climáticos.

Aunque Chile es reconocido internacionalmente como uno de los países más avanzados en la región en materia de política climática, y ha sido evaluado como “casi suficiente” (Almost Sufficient) por el Climate Action Tracker, la nueva NDC también subraya que persiste una brecha entre las metas y su implementación efectiva. Lograr la ruta hacia el 2030 y 2035 requiere acelerar la acción en transporte, industria, transición hídrica, economía circular, financiamiento verde y adaptación territorial.

En síntesis, la NDC de Chile constituye un marco integral que combina metas cuantificadas, políticas sectoriales, consideraciones sociales y una visión de largo plazo. Es un instrumento estratégico que orienta la acción climática del país y que demanda una ejecución coordinada entre el Estado, las empresas, los territorios y la sociedad civil para lograr una transición justa, sostenible y coherente con los desafíos del cambio climático.

## Principales Desafíos y Barreras

A pesar de los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, Chile sigue enfrentando desafíos significativos:

**1.- Alta Dependencia de los Combustibles Fósiles:** Aunque el sector energético ha avanzado en la incorporación de ERNC, el transporte y la minería continúan siendo los principales emisores de CO<sub>2</sub> en Chile. Según el Ministerio del Medio Ambiente, en 2023 el 40% de las emisiones de GEI en Chile provienen del sector energético, seguido por la agricultura (22%) y transportes (18%).

**2.- Brecha en la Descarbonización del Transporte:** El transporte, especialmente el transporte urbano y el transporte pesado, representa una gran parte de las emisiones. La transición hacia vehículos eléctricos es aún incipiente, y las políticas públicas para promover la electromovilidad no son suficientemente integrales ni escalables. La Estrategia Nacional de Movilidad (2021) fijó el objetivo para 2035 de que el 100% de las ventas de vehículos livianos, medianos y de transporte público, además de maquinaria de gran tamaño, sean cero emisiones.

Otro punto clave es que, en 2025, Chile cuenta con una de las mayores flotas de buses eléctricos fuera de China, y se espera que el próximo año se supere el 50% de electrificación de la flota de transporte público en Santiago. Además, se están realizando esfuerzos para expandir esta electrificación a otras regiones del país.

**3.- Impactos del Cambio Climático en el Territorio:** Las emisiones mundiales crecieron en un 1,2% entre 2021 y 2022 hasta situarse en 57,4 gigatoneladas de CO<sub>2</sub>, la mayor cantidad jamás registrada. Ello implica un riesgo creciente de que fenómenos meteorológicos extremos se produzcan con mayor frecuencia, se propaguen más rápidamente y sean más intensos.

Las grandes potencias, principales fuentes contaminantes, tienen la obligación moral y política de liderar la transición hacia una economía baja en carbono, basada en fuentes de energía renovables, eficiencia energética, transporte sostenible, protección de los bosques y océanos, flora y fauna. También deben apoyar a los países en desarrollo, que son los más vulnerables a los impactos del cambio climático, a través de la cooperación financiera y tecnológica.

En este contexto, Chile es vulnerable a fenómenos climáticos extremos como sequías, incendios forestales e inundaciones, los cuales afectan principalmente a la agricultura y las comunidades rurales. Estos fenómenos exacerban la desigualdad social y económica y dificultan la implementación de políticas de adaptación.

## **Limitaciones para la Implementación de la Acción Climática**

**1.- Financieras:** La falta de financiamiento climático adecuado es una de las principales barreras para acelerar la acción climática en Chile. Aunque existe un marco legal que incentiva la inversión en energías renovables, la transición hacia una economía baja en carbono requiere grandes inversiones en infraestructura, tecnologías de bajo carbono y la capacitación de trabajadores en nuevas habilidades. Además, el acceso a fondos internacionales sigue siendo limitado, especialmente para proyectos de adaptación y resiliencia en comunidades vulnerables.

**2.- Descoordinación Institucional:** La acción climática requiere un enfoque integral y multinivel. Sin embargo, las políticas climáticas en Chile a menudo se ven fragmentadas entre diferentes ministerios y actores, lo que limita la efectividad de las medidas. A nivel local, muchas municipalidades carecen de los recursos y conocimientos necesarios para implementar políticas climáticas adaptadas a sus realidades.

**3.- Falta de Conciencia y Participación Ciudadana:** Aunque la sociedad chilena ha avanzado en la conciencia sobre el cambio climático, aún hay una brecha de participación ciudadana en la formulación e implementación de políticas climáticas. Las políticas públicas tienden a ser diseñadas sin una inclusión plena de las comunidades, especialmente aquellas más vulnerables, como las que habitan zonas rurales o las que enfrentan riesgos climáticos severos.

**4.- Marco Regulatorio:** La falta de un marco regulatorio claro y coherente puede dificultar la implementación de políticas y proyectos de acción climática.

**5.- Capacidad Técnica y Tecnológica:** La falta de capacidad técnica y tecnológica en algunos sectores productivos limita la implementación efectiva de proyectos de mitigación y adaptación.

## **Prioridades para el Período 2025-2030**

Chile debe acelerar la transición hacia una matriz energética 100% renovable. Esto implica no solo la ampliación de la capacidad instalada de energías renovables (solar, eólica, geotérmica), sino también la descarbonización de sectores como el transporte y la industria. Para esto, de acuerdo a la información de investigadores y expertos, se recomienda:

**1.- Impulsar la electromovilidad:** Aumentar los incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos (personales y comerciales) y crear infraestructura de carga en todo el país. Establecer metas claras para la electrificación del transporte público y privado.

**2.- Desarrollo de hidrógeno verde:** Chile tiene un gran potencial para producir hidrógeno verde debido a su alto recurso solar y eólico. El adecuado fomento de esta industria podría posicionar a Chile como un líder en la producción de hidrógeno limpio, lo que contribuiría significativamente a la reducción de emisiones en sectores difíciles de descarbonizar como el transporte marítimo, la minería y la industria pesada.

**3.- Fortalecimiento de las interconexiones regionales:** Mejorar las infraestructuras eléctricas para permitir un intercambio de energía renovable con los países vecinos, lo que contribuiría a estabilizar la oferta energética y reducir el uso de combustibles fósiles en momentos de alta demanda.

**4.- Desarrollo del Litio:** No hay que olvidar que Chile es uno de los principales productores de litio y cobre, materiales esenciales para la fabricación de baterías y componentes de vehículos eléctricos. La demanda creciente de estos materiales, además de las tierras raras, puede impulsar la economía nacional y posicionar a Chile como un líder en la cadena de suministro global de la electromovilidad. Además, la adopción de tecnologías de electromovilidad puede fomentar la innovación en el país, incentivando a las empresas a desarrollar nuevas soluciones pudiendo catapultar al país como un líder en sostenibilidad y tecnología avanzada.

### ***Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático***

La adaptación al cambio climático debe ser una prioridad clave en el período 2025-2030. Chile debe implementar políticas que aseguren la resiliencia de sus comunidades y ecosistemas frente a los impactos del cambio climático. Esto incluye:

**1.- Estrategias de manejo del agua:** La sequía se ha transformado en una realidad endémica y estructural. Según cifras de la Dirección General de Aguas, el 53% de las comunas en Chile se encuentran bajo decretos de escasez del recurso en términos de calidad, cantidad y continuidad. Hoy debemos aceptar la nueva realidad como la fuerte variación de precipitaciones, cambios en la evaporación y la temperatura del agua, con graves consecuencias para los ecosistemas, la biodiversidad, la salud y la subsistencia de cientos de millones de personas. Este crítico escenario implica desafíos en materia de gobernanza, regulación y gestión del agua.

Frente a la creciente escasez hídrica y sequías prolongadas, es urgente invertir en tecnologías para la gestión eficiente del agua en la agricultura y la industria, así como en el uso de aguas recicladas, y en materia de abastecimiento hídrico hemos visto un importante dinamismo en la emergente industria de la desalación, particularmente para su uso industrial.

**2.- Protección de ecosistemas:** Según la ONU, la humanidad enfrenta la amenaza de perder cerca de un millón de especies, afectando la estabilidad de los ecosistemas, la economía y a las comunidades que dependen de ellos. América Latina y el Caribe, albergan aproximadamente el 60% de la biodiversidad global, y experimentan una deforestación masiva y una preocupante disminución de vida silvestre. En ese escenario en la COP16, desarrollada en Cali, Colombia se establecieron metas ambiciosas como la "meta 30x30", que plantea proteger el 30% de los ecosistemas del planeta para 2030.

Para Chile, donde el 23% del territorio terrestre y el 42% de la zona económica exclusiva marina están protegidos, estos riesgos son latentes. Por ello, se torna urgente desarrollar políticas de conservación y restauración ecológica para proteger la biodiversidad y los ecosistemas que actúan como sumideros de carbono, como los bosques nativos y los humedales.

Los esfuerzos del país en áreas marinas protegidas y la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) son pasos importantes, pero para lograr un cambio sostenible, el sector privado debe participar activamente en este esfuerzo.

**3.- Infraestructura resiliente:** Desarrollar infraestructuras urbanas adaptadas a las nuevas realidades climáticas, como sistemas de drenaje para mitigar inundaciones y viviendas resistentes a fenómenos climáticos extremos y la reforestación de áreas afectadas por incendios forestales. Además, se debe avanzar en la construcción de embalses en zonas idóneas y sumar resiliencia, y en ese sentido, es necesario desarrollar la administración compartida y colaborativa de las cuencas como en el reúso de las aguas para equilibrar de alguna forma el estrés hídrico y recuperar los acuíferos a través de la coordinación público-privada. Estos esfuerzos contribuyen a mejorar la capacidad de adaptación de las comunidades y a reducir los riesgos asociados con eventos climáticos extremos.

## **Propuestas**

**1. Fortalecer la Gobernanza Climática:** Es esencial mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y sectores para asegurar una implementación efectiva de las políticas climáticas. Esto incluye la creación de mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir el progreso y ajustar las estrategias según sea necesario.

**2. Promover la Innovación Tecnológica:** Fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. Esto incluye el apoyo a startups y empresas innovadoras que desarrollen soluciones sostenibles.

**3. Incentivar la Participación Ciudadana:** Involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la implementación de proyectos de acción climática. La participación activa de la sociedad es crucial para asegurar el éxito de las políticas y para fomentar una cultura de sostenibilidad.

**4. Asegurar el Financiamiento Sostenible:** Movilizar recursos adicionales para financiar proyectos de mitigación y adaptación. Esto incluye la creación de mecanismos financieros innovadores, como bonos verdes y fondos de inversión sostenibles. También Instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Verde para el Clima proporcionan financiamiento a proyectos climáticos en países en desarrollo. En 2022, el Grupo Banco Mundial proporcionó un récord de 31.700 millones de dólares para apoyar la acción climática.

**5. Fomentar la Cooperación Internacional:** Una de las acciones más importantes es por supuesto la Cooperación Internacional ya que se pueden establecer mecanismos concretos de colaboración entre países, tanto en términos de financiamiento como de transferencia de tecnología y conocimientos, y así abordar el cambio climático de manera efectiva y equitativa. Es necesario un enfoque multisistémico que incluya diversos mecanismos de financiamiento para asegurar que los países en desarrollo puedan enfrentar la crisis climática de manera efectiva.

Fortalecer la colaboración con otros países y organizaciones internacionales para compartir conocimientos y recursos. La acción climática es un desafío global que requiere una respuesta coordinada y solidaria.

La acción climática en Chile ha avanzado significativamente desde 2015, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar los objetivos del ODS13. Las prioridades para el período 2025-2030 deben centrarse en la transición energética, la adaptación al cambio climático, la promoción de la economía circular, la educación y conciencia climática, y el aseguramiento del financiamiento adecuado. Superar los desafíos y barreras existentes requerirá un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad, así como una coordinación efectiva y una movilización de recursos a nivel nacional e internacional. Con un enfoque estratégico y una acción decidida, Chile puede liderar el camino hacia un futuro más sostenible y resiliente.





#### 4. Equidad: priorización y ejecución

Jonathan R. Barton y Rodrigo Álvarez

Instituto para el Desarrollo Sustentable UC/Instituto de Políticas Públicas UCN

Desde los inicios del pensamiento y las políticas asociadas con el desarrollo sustentable en los años 70, el tema de la equidad ha sido persistente. Mientras que muchas lecturas de la sustentabilidad se han enfocado en protección ambiental y ecoeficiencias, las mismas definiciones más usadas priorizan la necesidad de establecer nuevos equilibrios entre el desarrollo social y la explotación de la naturaleza, también entre grupos sociales, favoreciendo los grupos más marginados de la sociedad. Equidad entre las personas, entre generaciones, y entre el mejoramiento de la calidad de vida en relación con el medio ambiente constituye pilares centrales del concepto. Las reflexiones sobre la equidad y las brechas en general en los campos de los ODS seleccionados en este informe apuntan a dos conclusiones.

***Primero, hay una necesidad de priorizar según país y contexto subnacional.*** Los ODS cubren todos los ámbitos de la vida humana y planetaria, por eso tenemos una gran cobertura de temas y objetivos. Sin embargo, es solamente a través de la focalización en objetivos específicos que se puede identificar las brechas de mayor impacto negativo, e iniciar los planes, programas y medidas asociadas. No debemos olvidar que los ODS son indicadores, que miden cambios. Las medidas para generar estos cambios son las más importantes de la agenda, no la radiografía per se.

Algunos instrumentos en Chile que tributan al cumplimiento de los ODS están conectados entre sí. En el caso del ODS 13, por ejemplo, la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que representa los compromisos climáticos internacionales de Chile, en su actualización de 2020 incluyó un pilar social sobre la Transición Justa. Este concepto en un comienzo se relacionó con la Estrategia de Transición Justa del Ministerio de Energía sobre la descarbonización de la matriz eléctrica del país. En la última actualización de la NDC de Chile (2025) se reconoce el rol de los gobiernos subnacionales a través de la elaboración de planes regionales y comunales de acción climática. Además, se fortalece el pilar social de Transición Socio-Ecológica a través de “compromisos alineados con la Estrategia de Transición Socio-Ecológica Justa (ENTSJ) desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente”. Esta estrategia es un instrumento de política pública de carácter intersectorial que busca “identificar y desarrollar procesos de transformación y/o adaptación de los sistemas socioculturales hacia el equilibrio ecosistémico, bienestar de las personas y modelos productivos sostenibles, en el marco de la triple crisis por pérdida de la

biodiversidad, cambio climático y contaminación, asegurando el enfoque de derechos humanos, igualdad de género y trabajo decente”.

En ella se incluyen criterios de sustentabilidad como el enfoque de derechos humanos, la justicia ambiental, la adaptación y mitigación del cambio climático, entre otros. Por primera vez, la NDC reconoce de manera explícita el rol de los gobiernos subnacionales, comprometiendo la elaboración de planes regionales y comunales de acción climática a 2026, así como el despliegue de una red de financiamiento climático local. Además, incorpora el pilar social de Transición Socioecológica Justa con una estrategia centrada en territorios históricamente afectados por la contaminación y el deterioro ambiental, como Tocopilla, Mejillones, Calama, Quintero-Puchuncaví y Coronel. Esta estrategia contiene 74 metas y 101 medidas con enfoque en derechos, equidad de género e innovación, reconociendo también los conocimientos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Sin avances en equidad, los ODS siempre quedarán cortos y el proceso de desarrollo sustentable truncado. Tenemos cinco años para mostrar compromiso en, y evidencia de transformaciones concretas en línea con este pilar fundacional del desarrollo. Evaluar acciones diversas en relación con las consideraciones de equidad presentes en la definición en la ley 19.300, implica reducir acciones socioecológicas nocivas y que promueven inequidad, sin solamente enfocar en acciones a favor de la protección ambiental. No debemos confundir los conceptos de protección ambiental y el desarrollo sustentable, porque no son sinónimos. La protección del medio ambiente implica (19.300 Art. 2q) una parte importante del puzzle, pero no es suficiente en sí mismo: *“el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro.”*

***Segundo, la ejecución de medidas es lo que debemos también evaluar y medir, para establecer su eficacia.*** ¿Cuáles son las medidas que realmente traen mejores beneficios, en plazos razonables, para su replicación y escalamiento? El problema que enfrentamos es que todas las políticas públicas y las actividades privadas (con y sin lucro), influyen en los indicadores de una manera u otra. Debemos gravitar hacia la identificación de complementariedades, beneficios adicionales y la eliminación de trade-offs. Hay aprendizajes importantes para cosechar respecto a la implementación de medidas asociadas con el desarrollo sustentable como una función de cualquier política pública, inversión privada o acción comunitaria. El desarrollo sustentable no es separable o divisible: refleja el conjunto de acciones realizadas. Es clave identificar cuáles son las acciones que hay que disminuir o erradicar, y cuáles son las acciones para incentivar y promover.

La definición del desarrollo sustentable, en la ley 19.300 de 1994 (Art. 2g), es clara. Sin otra definición para orientar las políticas públicas y las acciones privadas, es este que sigue siendo nuestro norte como país:

*“el proceso de **mejoramiento sostenido y equitativo** de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, considerando el cambio climático de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras.”*

Los ODS miden nuestros logros y nuestras deficiencias al respecto. Este es el estado de nuestro desarrollo en 2025 después de una década de esfuerzos a múltiples escalas; a la vez revela los desafíos para 2030.

## Referencias

- Asamblea General de Naciones Unidas (2024) Progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: <https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2024/secretary-general-sdg-report-2024--ES.pdf>
- Asamblea General de Naciones Unidas (2024). El Pacto para el Futuro. A/RES/79/1. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/272/25/pdf/n2427225.pdf>
- Barton, J. & Álvarez, R. (2024). Los ODS y su descentralización, una tarea pendiente. En *¿Cómo hacer sostenible el desarrollo? Perspectivas territoriales de los ODS 2030 en la Región de Antofagasta* (pp. 14-35). Ediciones Científicas Universidad Católica del Norte. [https://doi.org/10.22199/isbn.9789562874922\\_1](https://doi.org/10.22199/isbn.9789562874922_1)
- Berdegú, J., Castillo, M., Gómez, I., Gordillo, G., Navea, J., Rojas, I., & Yáñez, R. (2024). The importance of assets for coping with COVID-19 and other shocks. *Global Food Security*, Vol. 40. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100732>
- CEPAL (2023). *Halfway to 2030 in Latin America and the Caribbean: progress and recommendations for acceleration*. Summary (LC/FDS.6/4/Rev.1).
- Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (CNIADS) (2023). *Informe Nacional Voluntario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile*. Gobierno de Chile. Santiago, 2023.
- Contreras Lisperguer, R. & Salgado Pavez, R. (2021) Informe regional sobre el ODS 7 de sostenibilidad energética en América Latina y el Caribe. Documentos de Proyectos. CEPAL. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c0ce93ea-b76a-4f7d-9496-f576d25d28bb/content>
- Corporación 3xi, & Critería. (2024). *Segundo estudio nacional de polarizaciones: Entendiendo las (des)confianzas*. Corporación 3xi y Critería.
- FAO (2016). Methods for Estimating Comparable Rates of Food Insecurity Experienced by Adults Throughout The world. FAO, Rome. <https://www.fao.org/3/i4830e/i4830e.pdf>
- FAO (2024). *Estimation of the prevalence of moderate and severe food insecurity in Chilean municipalities using small area estimation methods*. En: <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd1350en>
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum*. En: <https://doi.org/10.4060/cc3017en>
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024. Financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms*. En: <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd1254en>

- Filho, W.L., Wall, T., Salvia, A.L., Pimenta Dinis, M.A., & Mifsud, M. (2023). The central role of climate action in achieving the United Nations' Sustainable Development Goals. *Sci Rep* 13, 20582 <https://doi.org/10.1038/s41598-023-47746-w>
- Fuentes, V., Jiménez, J., & Mlynarz, D. (2022). *Ollas comunes: Iniciativas de respuesta comunitaria ante el hambre en Santiago de Chile en el contexto de pandemia por COVID-19*. RIMISP. En: [https://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2022/10/Documento\\_en\\_proceso-Ollas-Comunes-Iniciativas-Respuesta-Comunitaria-Hambre-Santiago-Chile-Contexto-Pandemia-COVID-19.pdf](https://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2022/10/Documento_en_proceso-Ollas-Comunes-Iniciativas-Respuesta-Comunitaria-Hambre-Santiago-Chile-Contexto-Pandemia-COVID-19.pdf)
- Fundación Superación de la Pobreza. (2017). *Umbrales sociales para Chile 2017: Desafíos para la política social*. Fundación Superación de la Pobreza.
- Fundación Superación de la Pobreza. (2021). *Umbrales sociales para Chile 2021: De los territorios al país: Las claves de la nueva política social*. Fundación Superación de la Pobreza.
- Kaul, S., Akbulut, B., Demaria, F. & Gerber, J.F. (2022). Alternatives to sustainable development: what can we learn from the pluriverse in practice? *Sustainability Science* 17, 1149–1158 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11625-022-01210-2>
- Lafortune, G. and Fuller, G. (2025). *Europe Sustainable Development Report 2025: SDG Priorities for the New EU Leadership*. Paris: SDSN and Dublin: Dublin University Press
- Lynch, A., Bond, H., Sachs, J., 2021. *In the Red: The US Failure to Deliver on a Promise of Racial Equality*. New York: SDSN.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta CASEN (2006 –2017) y Encuesta CASEN en Pandemia 2020.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia, *Informe de Estrategia de Chile para la Implementación de la Agenda 2030 (2024)*.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2017). *Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)*, Gobierno de Chile.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2017). Informe Nacional Voluntario 2017
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2019). Informe Nacional Voluntario 2019.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2020). *Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) en pandemia 2020*. Gobierno de Chile.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2022). *Encuesta de caracterización socioeconómica nacional, Casen 2022*.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2023). Informe Nacional Voluntario 2023.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). *Estrategia de Chile para la implementación de la Agenda 2030*. Gobierno de Chile.

- Nussbaum, M., & Sen, A. (1997). La calidad de vida. México D.F, México: Fondo de Cultura Económica.
- OCDE/CEPAL. (2005) *Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile*. Naciones Unidas.
- OCDE/CEPAL. (2016).Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile. Naciones Unidas.
- OECD (2024), OECD Environmental Performance Reviews: Chile 2024, OECD Publishing, París
- ONU (2023). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Edición especial. Nueva York
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2024). *El desarrollo humano de las comunas de Chile*. Santiago, Chile.
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K. *et al.* (2009) A safe operating space for humanity. *Nature* 461, 472–475. <https://doi.org/10.1038/461472a>
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., III, Lambin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., . . . Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. *Nature*, 461(7263), 472–475
- Sachs, I. (1974). Ecodesarrollo: un aporte a la definición de estilos de desarrollo para América Latina. *Estudios Internacionales* 25 (1974) 57–77
- Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G. (2024). The SDGs and the UN Summit of the Future. Sustainable Development Report 2024. Paris: SDSN, Dublin: Dublin University Press.
- Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G., & Iablonski, G. (2025). *Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century* (Sustainable Development Report 2025). SDSN; Dublin University Press.
- Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G., & Iablonski, G. (2025). *Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century* (Sustainable Development Report 2025). SDSN; Dublin University Press.
- Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Teksoz, K., Duran-Delacre, D., & Sachs, J. (2017). National baselines for the Sustainable Development Goals assessed in the SDG Index and Dashboards. *Nature Geoscience* 10, 547–555. <https://doi.org/10.1038/ngeo2985>
- Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Teksoz, K., Duran-Delacre, D., & Sachs, J. (2017). National baselines for the Sustainable Development Goals assessed in the SDG Index and Dashboards. *Nature Geoscience* 10, 547–555. <https://doi.org/10.1038/ngeo2985>
- Sunkel, O. y Gligo, N. (comp.) (1980) *Estilos de desarrollo y medio ambiente en la América Latina*. Santiago: Fondo de Cultura Económica.
- Trott, CD, Gray, ES, Lam, S., Courtney, RH, Roncker, J. y Even, TL (2023). Acción popular por la justicia climática: una revisión sistemática. *Local Environment* , 28 (9), 1131–1152. <https://doi.org/10.1080/13549839.2023.2187363>

United Nations (2024) *The Sustainable Development Goals Report 2024*.

United Nations (2025) *The Sustainable Development Goals Report 2025*.

United Nations (2025) *The Sustainable Development Goals Report 2025*.

Valdés, J., Lorca, Á., Salas, C., Pinto, F., Herrera, R., Bañados, A., Urtubia, R., Castillo, P., Maulén, L., y González, D. (2023) Greenhouse Gas Mitigation Beyond the Nationally Determined Contributions in Chile: An Assessment of Alternatives. *Environmental Defense Fund Economics Discussion Paper Series, EDF EDP 23-02*, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4481537>.

Yáñez, R., Navea, J. y Jara, B. (2024). *Inseguridad alimentaria en Chile: una perspectiva multidimensional*. Rimisp, Policy brief. En: <https://rimisp.org/inseguridad-alimentaria-en-chile-una-perspectiva-multidimensional/>.

Yáñez, R., Olcay, C., Navea, J., Ahumada, G., & Jara, B. (2025). *Food Insecurity through the Lens of Multidimensional Poverty: Evidence from Chile*. Social Science and Medicine. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.11849>

